

RESOLUCIÓN DEL SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO POR LA QUE SE APRUEBA EL PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE, DE PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES, AUSENCIA DE DOBLE FINANCIACIÓN Y ADECUACIÓN DEL RÉGIMEN DE AYUDAS DE ESTADO DEL MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO EN PROYECTOS FINANCIADOS CON CARGO AL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (NEXT GENERATION UE) EN EJECUCIÓN DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA.

El 21 de junio de 2020 el Consejo Europeo aprobó la creación del programa Next Generation EU como un instrumento económico con el objetivo de amortiguar el impacto de la crisis sin precedentes producida por la pandemia COVID-19. Este plan establece un paquete de medidas económicas de gran alcance para promover una rápida recuperación, constituyendo las bases de un crecimiento sostenible para las próximas décadas, y diseñando un planteamiento innovador que favorezca la convergencia, la resiliencia y la transformación en la Unión Europea.

El Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia, establecido a través del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, es el núcleo de este Fondo de Recuperación. El Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia tiene cuatro objetivos: promover la cohesión económica, social y territorial de la UE; fortalecer la resiliencia y la capacidad de ajuste de los Estados Miembros; mitigar las repercusiones sociales y económicas de la crisis de la COVID-19; y apoyar las transiciones ecológica y digital.

Para alcanzar esos objetivos, cada Estado Miembro ha diseñado un Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia que incluye las reformas y los proyectos de inversión necesarios para alcanzar esos objetivos. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español tiene cuatro ejes transversales que se vertebran en 10 políticas palanca, dentro de las cuales se recogen treinta componentes, que permiten articular los programas coherentes de inversiones y reformas del Plan. Estos cuatro ejes son: la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión social y territorial y la igualdad de género.

Para hacer efectivas las iniciativas planteadas en el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, las Administraciones Públicas han adaptado los procedimientos de gestión y el modelo de control. Algunas medidas de agilización se establecieron mediante el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Asimismo, a través de la aprobación de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se da traslado de las previsiones contenidas en el Reglamento (UE) 2021/241 del Consejo Europeo por el que se configura el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.



CSV : GEN-8c29-0e05-ec43-eb72-a317-4d89-d048-da38

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

FIRMANTE(1) : MIGUEL GONZALEZ SUELA | FECHA : 22/02/2022 13:31 | NOTAS : F

Entre las previsiones de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, destaca la obligación que impone y desarrolla el artículo 6 de que, con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones que el artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, impone a España en relación con la protección de los intereses financieros de la Unión como beneficiario de los fondos del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia, toda entidad, decisora o ejecutora, que participe en la ejecución de las medidas del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia deberá disponer de un «Plan de medidas antifraude» que le permita garantizar y declarar que, en su respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes se han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.

En cumplimiento de dicho mandato, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha elaborado, a través de su Subsecretaría, el Plan de medidas antifraude, de prevención de conflicto de intereses, ausencia de doble financiación y adecuación del régimen de ayudas de Estado para la gestión de todos los proyectos financiados con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Su objeto es definir las principales acciones que deben adoptarse para evitar el mal uso o el fraude en los recursos financieros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con la finalidad de prevenir, detectar y establecer medidas correctoras para que los recursos financieros procedentes de la Unión Europea no se malgasten y cumplan los importantes fines para los que están asignados.

El citado Plan se configura como un instrumento de planificación vivo y flexible, que permite su modificación mediante nuevas instrucciones, normativa o guías para la elaboración de estos planes, así como mantiene una revisión continua de cada una de las medidas planificadas en la lucha contra el fraude para su perfeccionamiento. Este plan incluye los requerimientos mínimos identificados en el artículo 6.5 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre determina, en torno a las cuatro áreas clave del denominado ciclo antifraude: prevención, detección, corrección y persecución y será de aplicación, exclusivamente, a las actuaciones que lleve a cabo este organismo para la ejecución de los fondos del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia, dentro de sus obligaciones establecidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

De acuerdo con el artículo 12.2 del Real Decreto 500/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales enumera, entre otras, las siguientes competencias de la Subsecretaría:

- o) La gestión económica y financiera del Departamento.
- p) La dirección y supervisión de la contratación del Departamento y de sus organismos adscritos.
- v) Dictar instrucciones y órdenes de servicio en relación con la gestión y tramitación de materias propias del Departamento.



CSV : GEN-8c29-0e05-ec43-eb72-a317-4d89-d048-da38

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

FIRMANTE(1) : MIGUEL GONZALEZ SUELA | FECHA : 22/02/2022 13:31 | NOTAS : F

En el ámbito específico del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, según establece el artículo 25.2 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, relativo a las Instrucciones de Gestión:

2. La persona titular de la subsecretaría, en su ámbito de competencias, dictará las instrucciones oportunas para la adopción de las recomendaciones, orientaciones o modelos tipo aprobados por el Comité Técnico para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior, así como cualesquiera otras que estime oportuno para la mejor gestión, en particular en estos ámbitos:

- a) Prioridades de tareas o acciones.
- b) Designación de unidades responsables de liderar acciones o proyectos.
- c) Reorganización de medios y recursos.
- d) Creación de grupos de trabajo o equipos para la realización de encargos.

Por cuanto antecede, el Subsecretario para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico,

RESUELVE

Primero.- Aprobar el Plan de medidas antifraude, de prevención de conflicto de intereses, ausencia de doble financiación y adecuación del régimen de ayudas de Estado del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de aplicación en proyectos financiados con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (Next Generation UE).

Segundo.- Ordenar la publicación del Plan de medidas antifraude, de prevención de conflicto de intereses, ausencia de doble financiación y adecuación del régimen de ayudas de Estado, para su máxima difusión, en el apartado específico del Portal web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Madrid, a fecha de firma electrónica

EL SUBSECRETARIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO
DEMOGRÁFICO

Miguel González Suela



CSV : GEN-8c29-0e05-ec43-eb72-a317-4d89-d048-da38

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

FIRMANTE(1) : MIGUEL GONZALEZ SUELA | FECHA : 22/02/2022 13:31 | NOTAS : F



**PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE, DE PREVENCIÓN DE CONFLICTO
DE INTERESES, AUSENCIA DE DOBLE FINANCIACIÓN Y
ADECUACIÓN DEL RÉGIMEN DE AYUDAS DE ESTADO**

**PLAN DE RECUPERACIÓN,
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA**



ÍNDICE

1 PRÓLOGO	5
2 INTRODUCCIÓN	8
3 MARCO NORMATIVO	11
3.1 Legislación Europea.....	11
3.2 Legislación Nacional.....	13
4 MOTIVACIÓN DEL PLAN ANTIFRAUDE	16
4.1 Objeto del Plan.....	16
4.2 Ámbito Subjetivo del Plan.....	16
5 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y FUNCIONES	18
5.1 UNIDAD DE MEDIDAS ANTIFRAUDE (UMA)	18
5.2 FUNCIONES	20
5.2.1 Funciones de la Unidad:.....	20
5.2.2 Funciones de la Secretaría de la Unidad:	20
6 LUCHA CONTRA EL FRAUDE	22
DEFINICIÓN.....	22
CICLO ANTIFRAUDE	23
MEDIDAS DE CONTROL VIGENTES HASTA LA FECHA.....	25
MEDIDAS ANTIFRAUDE ESPECÍFICAS DEL PRTR.....	26
Medida 1 - Declaración de compromiso al más alto nivel.....	27
Medida 2 - Código Ético.....	27
Medida 3 - Información y formación.....	27
Medida 4 - Autoevaluación del Riesgo del Fraude.....	28
Medida 5 - Un sistema de control interno.....	30
Medida 6 - Buzón de denuncias.....	31
Medida 7 - Información y publicidad	31
Medida 8 - Conservación de Documentos.....	31
Medida 9 - Investigación denuncias.....	32
Medida 10 - Sistema de Indicadores de fraude (banderas rojas)	32
Medida 11 - Procedimiento de corrección.....	33
Medida 12 - Procedimiento de persecución de las actividades supuestamente fraudulentas.....	34

Medida 13 – Procedimiento para el Seguimiento de recuperación de los importes percibidos por el defraudador	35
7. PREVENCIÓN DEL CONFLICTO DE INTERÉS	37
DEFINICIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS.....	37
MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL CONFLICTO DE INTERÉS	41
Medida 1 - Mapa Riesgos y Check-list sobre Conflicto de Intereses	41
Medida 2 - Procedimiento de gestión del Conflicto de Intereses	41
Medida 3 - Régimen de Incompatibilidades	42
Medida 4 - Procedimiento para la Declaración de ausencia de conflicto de interés (DACI)	43
Medida 5 - Formación en materia de conflicto de interés	43
8. PREVENCIÓN DE LA DOBLE FINANCIACIÓN	44
DEFINICIÓN.....	44
MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LA DOBLE FINANCIACIÓN	46
Medida 1 - Mapa Riesgos y Check-list sobre Doble Financiación	47
Medida 2 - Certificado del beneficiario de ausencia de Doble Financiación.....	47
Medida 3 - Autoevaluación Entidad Gestora.....	47
9. COMPATIBILIDAD DEL RÉGIMEN DE AYUDAS DE ESTADO	48
DEFINICIÓN.....	48
MEDIDAS DE COMPATIBILIDAD CON EL RÉGIMEN DE AYUDAS DE ESTADO	50
Medida 1 - Mapa Riesgos y Check-list sobre acciones susceptibles de incompatibilidad con el régimen de ayudas de estado.....	50
Medida 2 - Certificado del beneficiario de ausencia de incompatibilidad con el régimen de Ayudas de Estado.....	51
Medida 3 - Autoevaluación Entidad Gestora.....	51
10 REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PLAN.....	52
ANEXOS.....	53
ANEXO I DECLARACIÓN DEL SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO	53
ANEXO II CÓDIGO ÉTICO DEL PERSONAL INTERVINIENTE EN LA GESTIÓN DEL FONDO	
55	
ANEXO III INDICADORES DE RIESGOS DE FRAUDE (BANDERAS ROJAS).....	58
ANEXO IV INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD.....	67
ANEXO V CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS.....	68

ANEXO VI AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN DE RIESGO DE FRAUDE	69
ANEXO VII MODELO DE DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES 72	
ANEXO VIII DOBLE FINANCIACIÓN	74
ANEXO IX DOBLE FINANCIACIÓN	75
ANEXO X AYUDAS DE ESTADO	76
ANEXO XI CERTIFICADO DE AUSENCIA DE AYUDAS DE ESTADO	80

1 PRÓLOGO

El 11 de marzo de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró como *pandemia mundial* el brote de coronavirus iniciado meses antes en el continente asiático. Algunos precedentes, como la Gripe A (H1N1) en 2009, e incluso la epidemia de Ébola en 2014, habían situado a las pandemias como riesgo emergente a escala global dentro de las Estrategias de Seguridad Nacionales. Así estaba reflejado en la Estrategia de Seguridad Nacional Española (2017 – 2022) y en la Estrategia Europea de Seguridad (2016 – 2021).

La sucesión de acontecimientos ocurridos desde marzo de 2020, sin embargo, trastocó todas las previsiones. La multiplicación de contagios y la gravedad de los casos llevaron al mundo a una situación límite, enfrentándose a un riesgo global sin precedentes y de consecuencias imprevisibles. La crisis económica derivada del parón productivo y del cese de toda actividad a lo largo y ancho del planeta, auguraba a corto y medio plazo serias dificultades para la recuperación.

Es en este contexto en el que desde Europa se plantea el paquete de medidas económicas y de dinamización de los sectores productivos más ambicioso tras la II Guerra Mundial.

El robusto sistema institucional europeo, la coordinación en las medidas adoptadas al inicio de la crisis, así como la profunda creencia de que *solo una Europa unida es una Europa más fuerte*, es lo que ha permitido la adopción de este ambicioso plan que no solo tiene como objetivo recuperar los niveles económicos, productivos y de bienestar social previos a la pandemia, sino servir de catalizador de políticas más ecológicas, más digitales y más resilientes.

La filosofía del Plan deja claro su objetivo al definirlo del siguiente modo:

Esto es NextGenerationEU. Es más que un plan de recuperación. Es una oportunidad única para salir más fuertes de la pandemia, transformar nuestra economía y crear oportunidades y trabajos para esa Europa en la que queremos vivir. Es el momento de trabajar para crear una Europa más ecológica, más digital y más resiliente.

Tan ambiciosos objetivos precisan de un paquete de medidas normativas que le den contenido práctico y procedimental. En este sentido, y para la gestión de uno de los principales instrumentos contenidos en el Plan NextGenerationEU, se aprobó el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

Este Reglamento se configura como la principal herramienta de gestión de las ambiciosas medidas de recuperación mencionadas, junto con el Acuerdo de Financiación de la Comisión con cada Estado Miembro,

En este sentido, el gran desafío de la Administración en nuestro país es garantizar la puesta en marcha de un plan que atienda a las siguientes premisas:

- Lograr una distribución equitativa de los fondos, territorial y sectorialmente.
- Garantizar los principios de transparencia y buen gobierno, consagrados en la normativa española.
- Garantizar el principio de buena gestión financiera postulado por la normativa comunitaria para la gestión de los fondos europeos.

Para articular y adaptar a nuestro ordenamiento jurídico las previsiones del Reglamento del Consejo, se aprobó el 29 de septiembre de 2021 la Orden Ministerial 1030/2021 por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Dicha Orden en su artículo 2 sintetiza los principios que dan carta de naturaleza al reglamento en su conjunto al exponer que *"Son principios o criterios específicos, de obligatoria consideración en la planificación y ejecución de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y por lo tanto transversales en el conjunto del Plan:*

- a) Concepto de hito y objetivo, así como los criterios para su seguimiento y acreditación del resultado.*
- b) Etiquetado verde y etiquetado digital.*
- c) Análisis de riesgo en relación con posibles impactos negativos significativos en el medioambiente (do no significant harm, DNSH), seguimiento y verificación de resultado sobre la evaluación inicial.*
- d) Refuerzo de mecanismos para la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de interés.*

- e) *Compatibilidad del régimen de ayudas de Estado y prevención de la doble financiación.*
- f) *Identificación del receptor final de los fondos, sea como beneficiario de las ayudas, o adjudicatario de un contrato o subcontratista.*
- g) *Comunicación.*

En virtud del cumplimiento de estos principios, concretamente los recogidos en la letra d) y e) del mencionado precepto, se aprueba el presente Plan de Medidas antifraude, en el que se integran los cuatro riesgos fundamentales que, en la gestión de fondos europeos, han de garantizar las administraciones públicas en la actualidad: Lucha contra el Fraude y la Corrupción, eliminación de los conflictos de intereses, ausencia de doble financiación y adecuación de las subvenciones públicas al régimen de Ayudas de Estado.

Este documento se configura como una herramienta de mejora continua en la gestión y funcionamiento del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En este sentido, se incorporarán las actualizaciones y novedades normativas que contribuyan al refuerzo de estos principios y garanticen una gestión eficaz al servicio de la ciudadanía y la salvaguarda del interés general.

2 INTRODUCCIÓN

La Administración Pública fue definida por el profesor Baena de Alcázar como *el brazo ejecutor de los fines del Estado que, con personalidad jurídica única, actúa para el cumplimiento de sus fines*.

Es el artículo 103.1 de nuestra Carta Magna el que mejor tipifica esta idea al prever que “*La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho*”. Situando al principio de legalidad como piedra angular de nuestro Ordenamiento Jurídico.

Dicho mandato se ve además reforzado en su disposición tercera por la previsión del legislador al garantizar la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones de los Empleados Públicos.

Estos principios han sido, además, desarrollados en nuestro ordenamiento jurídico mediante diversas normas, entre las que destaca la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. O el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que recoge un amplio catálogo de principios éticos y de buena conducta.

No obstante, para reforzar los principios de buena gestión, tanto el Reglamento del consejo por el que se configura el MRR, como su posterior desarrollo en nuestro país por la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, incluyen una mención expresa al obligado cumplimiento de los mismos, concretamente y en el ámbito que nos ocupa:

- d) Refuerzo de mecanismos para la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de interés.*
- e) Compatibilidad del régimen de ayudas de Estado y prevención de la doble financiación.*

La garantía de todos ellos en el marco del NextGenerationEU, vela por el cumplimiento del principio de buena gestión financiera requerido por el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de julio de 2018).

En este sentido, la elaboración de este Plan responde a lo dispuesto en el artículo 22.1 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que obliga a los Estados miembros, en su condición de beneficiarios o prestatarios de fondos en el marco del Mecanismo, a adoptar todas las medidas adecuadas para proteger los intereses financieros de la Unión y para velar por que la utilización de los fondos en relación con las medidas financiadas por el Mecanismo se ajuste al Derecho aplicable de la Unión y nacional. De manera particular, basarán sus actuaciones en la prevención, detección y corrección del fraude y la corrupción, los conflictos de intereses, la doble financiación y la adecuación de las subvenciones públicas al régimen de Ayudas de Estado.

Por su parte, el artículo 6.1 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, establece que toda entidad, decisora o ejecutora, que participe en la ejecución de las medidas del PRTR deberá disponer, de un «*Plan de medidas antifraude*» que le permita garantizar y declarar que, en su respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes se han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.

En virtud del contexto normativo descrito, el presente documento aborda los siguientes principios de gestión:

1. Lucha contra el Fraude y la Corrupción
2. Prevención del Conflicto de Intereses
3. Prevención de la Doble Financiación
4. Compatibilidad con el Régimen de Ayudas de Estado

El tratamiento integral persigue una garantía de imparcialidad y buena gestión en aquellos ámbitos susceptibles de generar este tipo de situaciones, como pueden ser la contratación pública, el régimen de subvenciones o cualquier otro instrumento jurídico de actuación.

En el presente texto se disponen medidas y procedimientos a implantar en el plazo inicial de un año, y que deberá ser revisado periódicamente durante todo el periodo de ejecución del Plan de Recuperación.

Por tanto, el marco inicial del presente Plan no es obstáculo para la elaboración e implementación de otros planes o instrumentos de control por parte de las entidades ejecutoras con objeto de mejorar los mecanismos de prevención mediante la puesta en común de sus propias previsiones y experiencias de gestión.

3 MARCO NORMATIVO

3.1 Legislación Europea

El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia señala en su **artículo 22, Protección de los intereses financieros de la Unión** que *“Al ejecutar el Mecanismo, los Estados miembros, en su condición de beneficiarios o prestatarios de fondos en el marco del Mecanismo, adoptarán todas las medidas adecuadas para proteger los intereses financieros de la Unión y para velar por que la utilización de los fondos en relación con las medidas financiadas por el Mecanismo se ajuste al Derecho aplicable de la Unión y nacional, en particular en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses. A tal efecto, los Estados miembros establecerán un sistema de control interno eficaz y eficiente y recuperarán los importes abonados erróneamente o utilizados de modo incorrecto. Los Estados miembros podrán recurrir a sus sistemas nacionales habituales de gestión presupuestaria:*

El mencionado artículo 22 establece que los Estados miembros están Obligados a:

- a) *comprobar periódicamente que la financiación proporcionada se haya utilizado correctamente de conformidad con todas las normas aplicables y que toda medida de aplicación de las reformas y de los proyectos de inversión en el marco del plan de recuperación y resiliencia se haya aplicado correctamente de conformidad con todas las normas aplicables, en particular en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses;*
- b) *tomar las medidas oportunas para prevenir, detectar y corregir el fraude, la corrupción y los conflictos de intereses según se definen en el artículo 61, apartados 2 y 3, del Reglamento Financiero (Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de julio de 2018) que afecten a los intereses financieros de la Unión y ejercitar acciones legales para recuperar los fondos que hayan sido objeto de apropiación indebida, también con respecto a cualquier medida para la ejecución de las reformas y los proyectos de inversión en el marco del plan de recuperación y resiliencia;*
- c) *También, con ocasión de cada solicitud de pago, adjuntarán:*

- i) una declaración de gestión en la que se indique que los fondos se han utilizado para los fines previstos, que la información presentada con la solicitud de pago es completa, exacta y fiable y que los sistemas de control establecidos ofrecen las garantías necesarias de que los fondos se han gestionado de conformidad con todas las normas aplicables, en particular las normas relativas a la prevención de conflictos de intereses, del fraude, de la corrupción y de la doble financiación procedente del Mecanismo y de otros programas de la Unión, de conformidad con el principio de buena gestión financiera;*
- ii) un resumen de las auditorías y los controles realizados, incluidas las deficiencias detectadas y las medidas correctivas adoptadas.*
- d) recabar, a efectos de auditoría y control del uso de fondos en relación con las medidas destinadas a la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco del plan de recuperación y resiliencia, en un formato electrónico que permita realizar búsquedas y en una base de datos única, las categorías armonizadas de datos siguientes:*
- i) el nombre del perceptor final de los fondos;*
- ii) el nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos sea un poder adjudicador de conformidad con el Derecho de la Unión o nacional en materia de contratación pública;*
- iii) los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de los fondos o del contratista, según se define en el artículo 3, punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo*
- iv) una lista de medidas para la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco del plan de recuperación y resiliencia, junto con el importe total de la financiación pública de dichas medidas y que indique la cuantía de los fondos desembolsados en el marco del Mecanismo y de otros fondos de la Unión;*
- e) Autorizar expresamente a la Comisión, a la OLAF, al Tribunal de Cuentas y, cuando proceda, a la Fiscalía Europea a ejercitar los derechos que les reconoce el artículo 129, apartado 1, del Reglamento Financiero y obligar a todos los perceptores finales de los fondos desembolsados para las medidas de aplicación de las reformas y los proyectos de inversión incluidos en el plan de recuperación y resiliencia, o a todas las demás personas o entidades que*

intervengan en su aplicación, y autorizar expresamente a la Comisión, a la OLAF, al Tribunal de Cuentas y, cuando proceda, a la Fiscalía Europea a ejercitar los derechos que les reconoce el artículo 129, apartado 1, del Reglamento Financiero, y a imponer obligaciones similares a todos los perceptores finales de fondos;

- f) *Conservar los documentos de conformidad con el artículo 132 del Reglamento Financiero.*

3.2 Legislación Nacional

El artículo 8 del Reglamento del Consejo, relativo a la ejecución del PRTR, determina que «La Comisión ejecutará el Mecanismo en régimen de gestión directa de conformidad con las normas pertinentes adoptadas en virtud del artículo 322 del TFUE, en particular el Reglamento Financiero y el Reglamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento Europeo y del Consejo». Este planteamiento conlleva el diseño de instrumentos específicos y la adaptación de los procedimientos al marco que se define.

En este sentido, el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, es una norma que cuenta con un doble objetivo:

- El primero y principal, de dimensión europea, consiste en establecer las disposiciones generales precisas para facilitar la programación, presupuestación, gestión y ejecución de las actuaciones financiadas con fondos europeos, en especial los que provienen del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
- El segundo objetivo (de carácter instrumental) es de dimensión nacional, de modo que incorpora una serie de herramientas de carácter general dirigidas a reducir las barreras normativas y administrativas, así como un conjunto de medidas de modernización de las administraciones públicas.

En su artículo 3 el texto recoge un catálogo de principios de buena gestión que las Administraciones Públicas han de aplicar en todas aquellas actuaciones vinculadas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. De manera específica, en su apartado segundo, detalla como necesaria para la protección de los intereses financieros de la Unión Europea la debida:

j) Prevención eficaz de los conflictos de interés, el fraude y las irregularidades.

El Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por tanto, se ha configurado como una herramienta facilitadora de los procedimientos habituales de funcionamiento de las Administraciones Públicas españolas de cara a garantizar una gestión eficaz y eficiente del Plan de Recuperación.

Dentro del esquema organizativo nacional en esta gestión del Plan, el Ministerio de Hacienda y Función Pública aparece como la autoridad responsable del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia ante las instituciones europeas.

En el desarrollo de sus competencias y de cara a la gobernanza de los Fondos del Mecanismo, se han publicado dos Órdenes Ministeriales como herramienta básica para la gestión del Plan por parte de los distintos Órganos intervinientes:

- Orden HFP/1030/2021 de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del mencionado Plan.
- Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Para el ámbito que nos ocupa, la Orden HFP/1030/2021 es la que mayor relevancia adquiere, ya que en ella se recogen los principios y criterios de obligatorio cumplimiento en la planificación y ejecución del PRTR. De manera específica, tanto en su artículo 2 (en el que los califica de “*principios de gestión*”, como en su artículo 6, exige el refuerzo de los mecanismos para la prevención, detección y corrección del fraude la corrupción y los conflictos de interés.

A tal efecto, toda entidad, decisora o ejecutora, que participe en la ejecución de las medidas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) deberá disponer de un «Plan de medidas antifraude» que le permita garantizar y declarar que, en su respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes se han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y el conflicto de intereses.

De acuerdo con el artículo 2 de la Orden y las definiciones establecidas en los artículos 3 y siguientes, son principios o criterios específicos, de obligatoria consideración en la planificación y ejecución de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y por lo tanto transversales en el conjunto del Plan, los siguientes:

- a) Concepto de hito y objetivo, así como los criterios para su seguimiento y acreditación del resultado.
- b) Etiquetado verde y etiquetado digital.
- c) Análisis de riesgo en relación con posibles impactos negativos significativos en el medioambiente (Do No Significant Harm, DNSH), seguimiento y verificación de resultado sobre la evaluación inicial.
- d) Refuerzo de mecanismos para la prevención, detección y corrección del fraude la corrupción y los conflictos de interés.
- e) Compatibilidad del régimen de ayudas de Estado y prevención de la doble financiación.
- f) Identificación del receptor final de los fondos, sea como beneficiario de las ayudas, o adjudicatario de un contrato o subcontratista.
- g) Comunicación.

Además de los sistemas formales de prevención que han de desarrollar los Órganos responsables y gestores, conforme al artículo 4 de la Orden, éstos autoevaluarán sus procedimientos a la entrada en vigor de la Orden HFP 1030/2021. Las autoevaluaciones deberán realizarse en el marco del desempeño de la función de control de gestión, y se practicarán, al menos, una vez cada año de vigencia del Plan.

De cara a la prevención del fraude, estos mecanismos de autoevaluación permitirán cuantificar el riesgo a partir de las respuestas a los cuestionarios que se plantean, sintetizando el análisis en un valor único, siendo el objetivo alcanzar el nivel de «*riesgo bajo*».



4 MOTIVACIÓN DEL PLAN ANTIFRAUDE

Con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones que el artículo 22 del Reglamento (UE) 241/2021 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, impone a España en relación con la protección de los intereses financieros de la Unión como beneficiario de los fondos del MRR, toda entidad, decisora o ejecutora, que participe en la ejecución de las medidas del PRTR deberá disponer de un «Plan de medidas antifraude» que le permita garantizar y declarar que, en su respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes se han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.

4.1 Objeto del Plan

El objeto de este Plan es concretar las medidas de control del riesgo de fraude en el ámbito de la ejecución de fondos europeos asignados a este Ministerio que se reciban a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en adelante MRR.

Con la puesta en marcha del mismo se busca impulsar una estrategia de lucha contra el fraude y concretar las medidas de control del riesgo de fraude en el ámbito de la ejecución de los fondos del MRR.

De acuerdo con lo anterior, el Subsecretario del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en adelante MITERD, resolverá la aprobación del Plan de medidas Antifraude, de prevención de conflicto de intereses, ausencia de doble financiación y adecuación del régimen de ayudas de estado, así como la creación de una Unidad con competencias para gestionar el Plan y llevar adelante las medidas que se consideren oportunas.

4.2 Ámbito Subjetivo del Plan

El contenido de este Plan será de aplicación a los Fondos Europeos del NextGenerationEU asignados al MITERD que sean tramitados por los organismos designados como responsables del MRR por la Secretaría General de Fondos europeos. Entendiendo que dicha actividad será desempeñada por empleados públicos cuya labor queda sujeta a las prescripciones previstas en este Plan.

Desde el punto de vista orgánico, este Plan de Medidas Antifraude se aplica en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, como entidad decisora en aplicación del artículo 6 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, no siendo de aplicación a aquellas otras Administraciones Autonómicas o Locales que sean entidades ejecutoras de las acciones que este Ministerio realice en el desarrollo del PRTR debiendo disponer de su propio instrumento administrativo y de control antifraude.

Este Plan de Medidas Antifraude no supone objeción para aquellos otros planes que los Órganos responsables o gestores y entidades ejecutoras dependientes funcionalmente del Ministerio tengan ya implantados, o que en el futuro elaboren en aplicación de la Orden HFP 1030/2021 de 29 de septiembre para el desarrollo del Plan para la Recuperación, Transición y Resiliencia.

Desde el punto de vista administrativo, el alcance de este Plan se extiende a todos aquellos expedientes iniciados para la consecución de Hitos y Objetivos, independientemente de cuál sea su tipo de tramitación (contratación pública, subvenciones, convenios o encargos a medios propios, entre otros).

Desde el punto de vista temporal, el alcance de este Plan se extiende desde el inicio de cada expediente administrativo hasta la finalización del plazo establecido para conclusión del propio Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, incluyendo los plazos establecidos para la conservación de documentos según el artículo 132 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del parlamento europeo y del consejo de 18 de julio de 2018 sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión.

5 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y FUNCIONES

El presente documento pretende constituir un registro de las actividades destinadas a la prevención del fraude, la corrupción, el conflicto de intereses, doble financiación y la adecuada gestión de las acciones previstas en materia de ayudas de Estado.

Los registros que fundamentarán el cumplimiento de estos principios generales del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que bien son objeto de inclusión en la Orden HFP/1030/2021 de 29 de septiembre o que serán generados durante el ciclo de vida de los expedientes Administrativos en relación con este documento planificador serán elaborados, custodiados y conservados por las unidades gestoras de los expedientes desde el punto de vista administrativo de la legislación aplicable a la Administración General del Estado, independientemente de su consideración como organismos responsables o ejecutores de cada componente, medida o inversión, proyecto o subproyecto.

Aquellos documentos relativos a la propia elaboración del Plan contenidos en las medidas propuestas serán recopilados por la Secretaría de la Unidad de Medidas Antifraude de forma que se guarde un registro de versiones y del ciclo de vida de cada instrumento jurídico para la gestión del Plan de Recuperación.

5.1 UNIDAD DE MEDIDAS ANTIFRAUDE (UMA)

Con el fin de atender a los requerimientos previstos tanto en el Reglamento del Consejo como en la Orden HFP/1030/2021, en relación con la prevención del fraude en la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, este ministerio creará, además de un buzón de denuncias, una Unidad de Medidas Antifraude (UMA) que dependerá orgánicamente de la Subsecretaría. Esta Unidad centralizará y coordinará gran parte de las medidas de prevención, así como las de detección, corrección y persecución del fraude.

Esta unidad coordinadora supone, junto con este Plan de Medidas Antifraude, el desarrollo de un planteamiento proactivo, estructurado, específico y eficaz en la toma de decisiones para gestionar el riesgo de fraude tal y como se especifica en la Orden 1030/2021 de 29 de septiembre.

Con el fin de atender a los requerimientos que el artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia se crea para la ejecución de las actuaciones previstas en el Plan de Reestructuración, Transformación y Resiliencia, financiado con Fondos del Mecanismo de recuperación y Resiliencia, una Unidad de Medidas Antifraude (UMA).

Composición de la Unidad de Medidas Antifraude (UMA)

Se trata de una unidad transversal y estará formada por:

1. El/la titular de la Subsecretaría, quien podrá delegar en el/la Directora/a General de Servicios
2. Dos representantes del Gabinete de la Subsecretaría: el/la jefe/a de Gabinete y un/a vocal asesor/a.
3. Dos representantes de la Oficina Presupuestaria: Subdirector/a y Subdirector/a Adjunto/a.
4. La persona titular de la Dirección del Fondo de Restauración Ecológica y Resiliencia
5. Un/a representante del IDAE
6. Un/a representante de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente
7. Un/a representante de la Secretaría de Estado de Energía
8. La persona titular de la Inspección General de Servicios del Ministerio
9. Un/a representante de la Intervención Delegada en el Ministerio
10. Un/a representante del Servicio Jurídico del Ministerio

Esta unidad estará asistida por una Secretaría que llevará a cabo, entre otras, las funciones propias de asistencia al órgano colegiado.

Periodicidad de Reuniones:

La UMA se reunirá con periodicidad trimestral (coincidiendo con el calendario de cumplimiento de Hitos y Objetivos previstos en el Council Implementing Decision), o cuando las circunstancias lo aconsejen.

La Secretaria de la Unidad tendrá un funcionamiento permanente.

5.2 FUNCIONES

5.2.1 Funciones de la Unidad:

1. Proponer la creación de un sistema de Controles que permita:
 - a. Conocer e informar de todos los controles realizados, tanto por organismos nacionales como comunitarios
 - b. Proponer la realización de controles sobre diversos aspectos de la ejecución del Plan.
2. Aprobar el plan de controles para el trimestre siguiente y promover controles a realizar por los responsables de gestión del MRR junto con la Inspección de servicios, así como proponer la muestra representativa para la realización de los controles.
3. Identificar problemas y proponer medidas correctoras
4. Proponer mejoras en el procedimiento y proponer modelos: elaboración de modelos de informes sobre resultados de controles, proponer medidas normativas o de gestión en materia de control y de seguimiento contable e informático del MRR, y cualesquiera otras medidas dirigidas a fomentar la formación en materia de prevención del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses en la gestión del MRR, así como para mejoras en la eficiencia en la gestión, y la coordinación interadministrativa en especial en la unificación de criterios y compatibilidad de sistemas.
5. Recibir y elaborar información sobre solicitudes de pago e informes sobre avances en la ejecución del Plan de Recuperación y Resiliencia, ingresos recibidos, devoluciones o descertificaciones. Proponer en su caso medidas para mejorar la gestión, control e información para las certificaciones y seguimiento de la ejecución del MRR, en particular evitando riesgos de inejecución y descertificación.
6. Solicitar información relativa al Buzón de denuncias, estudiando y evaluando las mismas.
7. Aprobar un Plan de Formación

5.2.2 Funciones de la Secretaría de la Unidad:

Dispondrá de una Secretaría dependiente de la misma para la gobernanza de la unidad y gestión del Plan de lucha contra el fraude. Esta Secretaría, se encargará de realizar los Controles Internos. El titular de la Secretaría de la Unidad será un funcionario de carrera de nivel 28.

Corresponderá al Secretario velar por la legalidad formal y material de las actuaciones del órgano colegiado, certificar las actuaciones del mismo y garantizar que los procedimientos y reglas de constitución y adopción de acuerdos son respetados.

Cuando las circunstancias lo exijan, se podrá requerir la colaboración de cualquier otro miembro del personal del Ministerio para la realización de tareas propias del control de la gestión, siempre respetando el principio de independencia entre órgano o unidades gestoras de proyectos y entidad decisora.

La Secretaría de la Unidad de Medidas Antifraude será la encargada de llevar a cabo los controles de adecuación a los principios de buena financiación sobre una muestra representativa, seleccionada en cada una de las reuniones trimestrales.

6 LUCHA CONTRA EL FRAUDE

DEFINICIÓN

En primer lugar, para concretar lo que se entiende por *fraude*, se ha de acudir al Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, de 26 de julio de 1995, en cuyo artículo 1.1. se define el fraude como:

- a) *En materia de gastos, cualquier acción u omisión intencionada relativa:*
- a. *A la utilización o a la presentación de declaraciones o de documentos falsos, inexactos o incompletos, que tengan por efecto la percepción o la retención indebida de fondos procedentes del presupuesto general de las Comunidades Europeas o de los presupuestos administrados por las Comunidades Europeas o por su cuenta.*
 - b. *Al incumplimiento de una obligación expresa de comunicar una información que tenga el mismo efecto.*
 - c. *Al desvío de esos mismos fondos con otros fines distintos de aquellos para los que fueron concedidos en un principio*
 - d. *a la vulneración del principio de buena gestión financiera de forma que se perjudique al presupuesto financiero de la Unión Europea, cuando pueda apreciarse un matiz de intencionalidad*

Conviene distinguir este concepto del término de irregularidad, al carecer de un cierto matiz de intencionalidad. Así, todos los hechos definidos como fraude son irregulares, pero no todas las irregularidades son fraude.

El ordenamiento jurídico español, en muchas ocasiones a partir de la actividad normativa de la Unión Europea u otras instituciones internacionales, articula un sistema completo de prevención del fraude en la gestión del presupuesto nacional, que es trasladable en su integridad a la protección de los Fondos. En relación con lo anterior, podemos destacar, en el ámbito que nos ocupa:

- La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español diversas Directivas, dota al sistema de un régimen de contratación orientado al cumplimiento de los principios de igualdad de trato,

no discriminación, transparencia, proporcionalidad e integridad. Adicionalmente, se establece mediante la Orden PCI/86/2019, de 31 de enero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de diciembre de 2018, de un Plan de Contratación Pública Ecológica de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y las entidades gestoras de la Seguridad Social.

- La Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude.
- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones

A pesar de la existencia de estos mecanismos, y para dotar a la gestión del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de las máximas garantías de gestión, se ha de impulsar un sistema de lucha contra el fraude beligerante y proactivo.

CICLO ANTIFRAUDE

Este sistema se ha de apoyar en cuatro grandes áreas desde las que contemplar los diferentes aspectos de la lucha contra el fraude, dependiente del momento en que se empieza a aplicar el plan, y que son:

1º. Prevención:

Es la parte más importante del sistema, ya que su objetivo es el de impedir la aparición del fraude. El ordenamiento jurídico español, en muchas ocasiones a partir de la actividad normativa de la Unión Europea u otras instituciones internacionales, articula un sistema completo de prevención del fraude en la gestión del presupuesto nacional, que es trasladable en su integridad a la protección de los Fondos. Este sistema es esencialmente normativo, y cubre por igual los proyectos que se financian con el presupuesto nacional que con fondos europeos. Además de las normas citadas, existen aspectos preventivos en la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común, la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen jurídico del Sector Público, la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.

A pesar de que el conjunto de normas constituye un sistema completo y en teoría suficiente, es conveniente plasmar el compromiso profundo que asume este Ministerio en la lucha contra el fraude añadiendo al sistema general diseñado para los presupuestos nacionales, un sistema complementario que refleje la preocupación y la intención de proteger los intereses económicos de la Unión Europea.

Para conseguir esos fines, se fomentarán valores como la integridad y honradez, haciendo hincapié en la objetividad, la rendición de cuentas y la asunción de responsabilidades.

2º. Detección:

A pesar de la existencia de sistemas de prevención, siempre existirá el riesgo de que se produzca algún tipo de actividad fraudulenta. Por este motivo es extremadamente importante contar con un sistema que permita detectar el fraude. Este sistema, en España, está basado en los controles que realiza la Intervención General de la Administración del Estado. La Intervención española realiza controles a todos los proyectos, además de fiscalizar todas las fases de la ejecución del presupuesto. Estos mecanismos se complementan con los recursos del Tribunal de Cuentas y del sistema judicial.

3º. Corrección

La detección de posible fraude, o su sospecha fundada, conllevará la inmediata suspensión del procedimiento, la notificación de tal circunstancia en el más breve plazo posible a la Autoridad de Gestión de la Secretaría General de Fondos, y a los organismos implicados en la realización de las operaciones, y la revisión de todos aquellos proyectos que hayan podido estar expuestos al mismo.

4º. Persecución:

La persecución de los posibles incidentes de fraude se llevan a cabo mediante 2 fases sucesivas:

- 1º. Comunicación a los responsables nacionales de la gestión del MRR los resultados obtenidos y las medidas adoptadas.
- 2º. Denuncia, si fuese el caso, de los hechos punibles a las Autoridades Públicas competentes (Servicio Nacional de Coordinación Antifraude –SNCA-) y, directamente, a

la Autoridad de Gestión para su comunicación a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude.

MEDIDAS DE CONTROL VIGENTES HASTA LA FECHA

El MITECO cuenta con una larga trayectoria en la ejecución de sistemas de control de diversos fondos europeos, destacando su experiencia de control en la implementación de los FEDER. Esta experiencia en el ámbito de los sistemas de control le permite una mejor materialización de los principios y objetivos diseñados para los fondos del MRR, alcanzando importantes sinergias con los sistemas de control ya existentes, lo que favorece una actuación más eficaz en este ámbito.

En la actualidad el sistema de control existente sobre los Fondos Europeos se compone de un conjunto de medidas específicas:

- a) **Elementos del Sistema Antifraude nacional:** De forma sucinta, se compone de los siguientes elementos:
 - a. Un código Ético
 - b. Una declaración de Lucha contra el Fraude de alto nivel
 - c. Un procedimiento para solventar los conflictos de interés.

- b) **Controles propios de la normativa ordinaria nacional:** presupuestaria, de contratación, subvenciones, convenios, encargos, etc

- c) **Controles adicionales para asegurar el cumplimiento de la normativa UE sobre los Fondos:** elegibilidad de las actuaciones, revisión de los informes de gestión para pedir pagos, certificación a la UE del cumplimiento de los requisitos previstos: ambientales, fechas de elegibilidad, que no se certifican impuestos recuperables o gastos financiables con ingresos generados por el propio proyecto, o fuera del período elegible, o financiados con otros fondos UE; aplicar el mapa de riesgos de fraude, etc.

- d) **Controles nacionales específicos adicionales** a los ordinarios para evitar riesgo de fraude, de conflicto de intereses y de corrupción: para ello se creó el **SNCA** (Servicio Nacional de Coordinación Antifraude) dentro de la IGAE. Y en el caso del MITECO, una Unidad específica de lucha contra el riesgo de Fraude, integrada por personal de la

Oficina Presupuestaria como Organismo Intermedio para el FEDER en materia de medio ambiente, y de la Inspección de Servicios del MITECO. Sus funciones son: examinar y tomar cuenta de los controles realizados como organismo intermedio, o informar de los resultados de los controles realizado sobre este organismo intermedio o actuaciones financiadas, controles que hayan hecho otras entidades; planificar otros controles a realizar, en su caso proponer medidas o aclarar criterios.

- e) **Controles Europeos:** incluidos en planes anuales de control de la IGAE, el Tribunal de Cuentas, la Unidad de Control de Fondos Comunitarios de la DG de Fondos UE del Ministerio de Hacienda, y controles de la OLAF (Oficina de Lucha contra el Fraude, de la Comisión Europea), del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea. Controlan no sólo actuaciones financiadas con los Fondos UE, sino el correcto funcionamiento de los sistemas de gestión y control de las entidades beneficiarias y de los Organismos Intermedios.

MEDIDAS ANTIFRAUDE ESPECÍFICAS DEL PRTR

Siendo este un Plan que cubre el ámbito de entidad decisora, el artículo 6.1 de la Orden HFP 1030/2021 de 29 de septiembre, prevé que “toda entidad, decisora o ejecutora, que participe en la ejecución de las medidas del PRTR deberá disponer de un «Plan de medidas antifraude» que le permita garantizar y declarar que, en su respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes se han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.” Por ello, la elección de las medidas de prevención y detección se deja a juicio de la entidad que asuma la responsabilidad de gestión, atendiendo a las características específicas de “su respectivo ámbito de actuación” y siempre teniendo en cuenta la necesidad de garantizar una conveniente protección de los intereses de la Unión.

Por lo tanto, este documento plantea unas líneas directrices que pueden ser ampliadas, mejoradas y adaptadas por cada responsable de gestión a sus características orgánicas y tipología de actuaciones e instrumentos de ejecución. Junto a las acciones antifraudes comunes, en el ámbito de los fondos del MRR se establecen un conjunto de medidas complementarias en cada una de las fases del ciclo antifraude:

1º. **PREVENCIÓN**: El sistema general se complementa con:

Medida 1 - Declaración de compromiso al más alto nivel

La elaboración de una declaración al más alto nivel del Departamento, donde se comprometa al mismo a luchar contra el Fraude. A esta Declaración se la dará la máxima difusión, en la propia página Web del Ministerio. Esta declaración se actualizará periódicamente. La declaración específica del Subsecretario del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico se incluye en el Anexo I del presente Plan.

Medida 2 - Código Ético

La difusión y el conocimiento mediante cursos de formación del código ético, código ya contemplado en los artículos del 52 al 54 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, incluidos en el Anexo II del presente Plan.

Medida 3 - Información y formación

La formación se realizará mediante cursos en dos ámbitos diferenciados:

- **Medida 3.1:** La difusión de los principios y comportamientos éticos y de concienciación
- **Medida 3.2:** La formación en metodologías para la identificación y la lucha contra el fraude.

Esta formación se dirigirá a todos los componentes del organismo, incluidos todos los niveles jerárquicos responsables de cada fase de la ejecución de las inversiones: órganos directivos, órganos gestores, órganos supervisores y organismos delegados. El objetivo es que tomen conciencia, adquieran capacidades y compartan experiencias en la lucha contra el fraude.

Las actuaciones de información y concienciación estarán encaminadas a la transmisión de mensajes oficiales del propio organismo. Se utilizarán todos los canales disponibles en el Ministerio.

Al mismo tiempo se impartirán una serie de módulos de formación (dentro de la medida 3.2) destinadas a promover la Ética Pública y que faciliten al mismo tiempo la detección y prevención del fraude.

Medida 4 - Autoevaluación del Riesgo del Fraude

Como se establece en el punto 4 del artículo 6 de la Orden 1030/2021 de 29 de septiembre, la evaluación de riesgo de fraude se configura como una actuación obligatoria para los órganos gestores.

Se pone en marcha un mecanismo para evaluar los riesgos e identificar las medidas más propensas a sufrir fraude, ya que las medidas de prevención, una vez establecidas, han de ser evaluadas para valorar su suficiencia en la atenuación del riesgo de fraude que presenta nuestro procedimiento de gestión.

Esta autoevaluación, incluida en el Anexo VI del presente Plan, tiene como objeto identificar los riesgos específicos identificados para los diferentes actores en la gestión de fondos, introduciendo si se identificasen en el estudio nuevos riesgos específicos para evaluar el impacto de cada uno de estos riesgos y la probabilidad de que ocurra. Permitiendo, además, evaluar la capacidad de nuestro sistema para evitarlo.

La realización de esta evaluación requiere llevar a cabo un análisis de riesgo para todas las medidas gestionadas, dejando evidencia del mismo, en busca de las partes del proceso más susceptibles de sufrir fraude, y controlarlas especialmente.

Este análisis se actualizará con carácter anual por las entidades gestoras teniendo en cuenta los cambios normativos en las medidas gestionadas, y podrá basarse en aspectos como:

- Identificación de las operaciones que son más susceptibles del fraude. Como puedan ser aquellas con alta intensidad, alto presupuesto, muchos requisitos a justificar por el solicitante, controles de elegibilidad complejos, etc.
- Identificación de posibles conflictos de intereses.
- Resultados de trabajos previos de auditorías internas.
- Resultados de auditorías de la Comisión Europea o del Tribunal de Cuentas Europeo, en su caso.
- Resultados y aprendizaje de investigaciones nacionales y de la OLAF, en su caso.

- Información de otras fuentes.

Una vez realizada la autoevaluación, se deberá poder tomar las consecuencias oportunas sobre el sistema implementado.

En su caso, el Órgano competente podrá adaptar esta herramienta del Anexo VI a las características específicas de la evaluación señalada en el artículo 6.4 de Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, así como a la tipología de instrumentos de gestión disponibles.

Se realizará una primera evaluación del riesgo de fraude en el momento posterior de aprobación del presente Plan. Conforme al artículo 6.5.c de la Orden mencionada, el presente Plan de medidas antifraude deberá:

c) Prever la realización, por la entidad de que se trate, de una evaluación del riesgo, impacto y probabilidad de riesgo de fraude en los procesos clave de la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y su revisión periódica, bienal o anual según el riesgo de fraude y, en todo caso, cuando se haya detectado algún caso de fraude o haya cambios significativos en los procedimientos o en el personal.

Una vez obtenido el resultado de la primera evaluación, los datos proporcionados serán utilizados para el establecimiento, por parte de los órganos gestores o ejecutores, de la periodicidad de las evaluaciones posteriores. La revisión se realizará de forma simultánea a la elaboración del Informe de Gestión del segundo semestre del año.

2º. **DETECCIÓN:**

A pesar de cualquier sistema de prevención que se establezca, siempre existirá el riesgo de que se produzca algún tipo de actividad fraudulenta. Por este motivo es extremadamente importante tener un sistema que permita detectar el fraude. Este sistema, en España, está basado en los controles que realiza la Intervención General de la Administración española. La Intervención española realiza controles a todos los proyectos y fiscaliza todas las fases de la ejecución del presupuesto. Este sistema se complementa con los recursos del Tribunal de Cuentas y del sistema judicial.

Este sistema es en sí mismo suficiente, no obstante, se creará un sistema complementario, cuya mera publicidad, además, contribuirá a robustecer el sistema de prevención. Este sistema está formado por una triple vía compuesta por 3 medidas:

Medida 5 - Un sistema de control interno

Por un lado, el control interno se consigue con la creación de la UMA encargada de conocer las denuncias y proponer controles y procedimientos y medidas de refuerzo para la detección y prevención del fraude, conflictos de interés, doble financiación que serán puestas en la práctica por los órganos gestores en relación a las acciones de desarrollo del PRTR de las entidades ejecutoras de su dependencia.

Esta Unidad será independiente del proceso de gestión de las inversiones desde un punto de vista orgánico y funcional, a efectos de mantener la independencia entre la Gestión y el Control de las Medidas.

Entre las medidas que despliegue, realizará un plan de controles interno sobre las distintas inversiones que permitan evaluar el nivel de ejecución y el respeto a las normas nacionales y europeas.

Propondrá la muestra seleccionada de forma aleatoria de proyectos o actuaciones que será examinada para comprobar que se ha cumplido con la normativa tanto nacional como comunitaria en su ejecución, evaluando mediante un sistema de “banderas rojas” el riesgo de fraude, con independencia de la evaluación del riesgo presentada por el propio responsable de medida.

La verificación en la gestión debe ser exhaustiva y los controles de ejecución deben centrarse en los riesgos y llevarse a cabo con la cobertura suficiente, ya que ello aumentará la probabilidad de detectar los posibles casos de fraude.

El personal a cargo de los controles debe conocer este Plan y lo que dispongan los manuales de procedimiento, así como recibir formación/comunicación en esta materia.

Todas las actuaciones llevadas a cabo en este ámbito deberán estar sustentadas por las evidencias correspondientes para garantizar una pista de auditoría adecuada.

Medida 6 - Buzón de denuncias

Se creará un buzón a través del cual se podrán presentar denuncias de forma anónima sobre los hechos que se consideren punibles. Estará disponible desde la página web del Ministerio. La Inspección de Servicios del Departamento ministerial será la unidad encargada del tratamiento y estudio inicial de las denuncias presentadas anónimamente a través de este buzón.

Medida 7 - Información y publicidad

De acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2 del REGLAMENTO (UE) 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como el artículo 2.2, g) y el artículo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se establece la obligación para los perceptores de fondos de la Unión de incluir de forma específica el origen de la financiación, tal y como se establece en el Anexo IV.A del presente Plan.

De este modo, todas las unidades del Ministerio velarán por la visibilidad de forma coherente, efectiva y proporcionada del origen de la financiación con cargo al MRR mediante la inclusión del emblema de la Unión y de una declaración que afirme *“financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU”*.

A su vez, todos los proyectos que se ejecuten con cargo al MRR deberán mostrar los requisitos específicos de comunicación identificados en el Manual de Identidad Visual del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Medida 8 - Conservación de Documentos

Mediante la creación de una Unidad de red específica se dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 132 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión.

De esta forma, se utilizará la citada Unidad de red para conservar los documentos justificativos, datos estadísticos y demás documentación sobre la financiación durante un periodo de 5 años, o de 3 años si el importe es inferior o igual de 60.000 EUR, así como los documentos de auditorías, recursos, litigios y reclamaciones, como se establece en el Anexo V.A del presente Plan.

Medida 9 - Investigación denuncias

Se abrirá una vía de comunicación a través de un canal de denuncias y se investigaran todas las denuncias que se realicen en relación con este asunto.

Se comunicarán, en su caso, las denuncias al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA), generando una vía directa de las denuncias recibidas en el buzón del Ministerio con el SNCA.

Este canal servirá tanto para las acciones en que directamente participe el Ministerio a través de sus poderes adjudicadores en aplicación de las medidas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia como en relación con las contrataciones ajustadas a la Ley de Contratos o actuaciones que realicen los beneficiarios de ayudas.

Medida 10 - Sistema de Indicadores de fraude (banderas rojas)

Los órganos gestores encargados de la autoevaluación del riesgo de fraude coordinarán que las entidades ejecutoras dispongan de indicadores de fraude en el proceso de desarrollo de sus proyectos y subproyectos.

Los indicadores de fraude son señales más específicas o «indicadores de alerta» de que está teniendo lugar una actividad fraudulenta, en la que se requiere una reacción inmediata para comprobar si es necesaria alguna acción.

Las banderas rojas pueden ser definidas como señales de alarma, pistas o indicios de posible fraude. La existencia de una bandera roja no implica necesariamente fraude, pero si la necesidad atención extra para descartar o confirmar un fraude potencial. En el Anexo III se relacionan las más empleadas, clasificadas por tipología de prácticas potencialmente fraudulentas. No se trata

de una relación exhaustiva y se podrá completar, en su caso, incorporando otros indicadores adaptándolos a su caso concreto al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en función de sus riesgos específicos.

Procedimiento correctivo ante el riesgo de fraude:

3º. **CORRECCIÓN:**

En la fase de corrección, la detección de posible fraude, o su sospecha fundada, se trasladará a la unidad que tomará las medidas oportunas. El sistema antifraude se complementa con otras medidas en el ámbito de ejecución de fondos vinculados al MRR, como son:

Medida 11 - Procedimiento de corrección

El titular del órgano administrativo responsable del procedimiento en que se tenga conocimiento de una conducta que pudiera ser constitutiva de fraude o corrupción, tras el análisis de la posible existencia de alguna de las banderas rojas definidas en el Plan, o que haya sido conocida por cualquier otra circunstancia, deberá dar traslado del asunto a la Unidad de Medidas Antifraude, quien procederá a:

- Recopilar toda la documentación que pueda constituir evidencias de dicho fraude
- Suspender de forma inmediata el procedimiento, paralizando las actuaciones administrativas pendientes, en especial los pagos.
- Notificar tales circunstancias en el más breve plazo posible a las autoridades interesadas, y a los organismos implicados en la realización de las operaciones,
- Elaborar un informe descriptivo de los hechos acaecidos
- Identificar y revisar todos aquellos proyectos y subproyectos que hayan podido estar expuestos al fraude identificado.
- Comunicar, junto con un informe y la pertinente evidencia documental, los hechos producidos y las medidas adoptadas a la entidad decisora (o a la entidad ejecutora que le haya encomendado la ejecución de las actuaciones, en cuyo caso será esta la que se los comunicará a la entidad decisora), quien comunicará el asunto a la Autoridad Responsable, la cual podrá solicitar la información adicional que considere oportuna de cara su seguimiento y comunicación a la Autoridad de Control.



- Adoptar las medidas que conforme a la normativa reguladora del procedimiento permitan evitar la concurrencia de fraude.
- Posteriormente, se dará traslado del asunto a la Unidad de Medidas Antifraude que procederá a:
 - o Evaluar de la incidencia del fraude y su calificación como sistémico o puntual.
 - o Retirar los proyectos o la parte de los proyectos afectados por el fraude y sobre los que se solicitó ayuda al MRR.
 - o En los casos necesarios, proceder a la recuperación de los importes ya pagados.

Dicha unidad evaluará de manera objetiva la posible existencia de fraude con la finalidad de decidir si una determinada conducta debe ser denunciada ante los órganos jurisdiccionales competentes o ante el Ministerio Fiscal para que sea investigada y, en su caso, sancionada penalmente.

La labor de comprobación de la información abarcará no solo a beneficiarios sino en lo relativo a la prevención de conflicto de interés para lo cual los órganos gestores como responsables de la evaluación del riesgo de fraude coordinarán que las entidades ejecutoras apliquen los indicadores de referencia de prevención, detección y corrección del fraude, corrupción y conflicto de intereses.

Una vez detectado el fraude, corresponde a la Unidad de Medidas Antifraude del PRTR su calificación como puntual o sistémico o en el grado que corresponda así como la toma de acciones reactivas que corrijan la situación a decidir en su momento por la Unidad de Medidas Antifraude.

4º. PERSECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS IMPORTES PERCIBIDOS POR EL DEFRAUDADOR

Una vez establecidas las medidas correctoras previas, si ha lugar, se procederá a:

Medida 12 - Procedimiento de persecución de las actividades supuestamente fraudulentas

- Comunicación de los hechos producidos y las medidas adoptadas a la entidad decisora (o a la entidad ejecutora que le haya encomendado la ejecución de las actuaciones, en cuyo caso será esta la que se los comunicará a la entidad decisora), quien comunicará el

asunto a la Autoridad Responsable, la cual podrá solicitar la información adicional que considere oportuna de cara su seguimiento y comunicación a la Autoridad de Control.

- Denuncia, en caso necesario, de los hechos punibles a las Autoridades Públicas competentes (Servicio Nacional de Coordinación Antifraude –SNCA–) para su comunicación a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude.
- En el caso de sospecha de fraude por empresas o terceros ajenos al poder adjudicador, se acudirá a las instancias jurídicas competentes por razón de la materia. Si fuese el caso, iniciar una información reservada para depurar responsabilidades o incoar un expediente disciplinario. Se trasladará a la Inspección de Servicios del Departamento en caso de existir indicios y/o los resultados de los controles a fin de que esta decida si es o no necesario la apertura del expediente.
- En los casos oportunos se denunciarán los hechos ante la fiscalía y los tribunales competentes.
- La entidad afectada deberá evaluar la incidencia del posible fraude y su calificación como sistémico o puntual y, en todo caso, retirar los proyectos o la parte de los proyectos afectados por el fraude y financiados o a financiar por el MRR.
- Por último, se evaluará si el alcance es a nivel de entidad ejecutora, órgano gestor o entidad decisora, teniendo en cuenta, entre otras circunstancias, el tipo de instrumento de ejecución (contratos, convenios, subvenciones, encargos a medios propios).

Medida 13 – Procedimiento para el Seguimiento de recuperación de los importes percibidos por el defraudador

En el caso de que se detecte un caso de fraude se procederá:

- 1º. Suspensión de los pagos al beneficiario afectado.
- 2º. Requerimiento al mismo de que devuelva las cantidades irregularmente percibidas.
- 3º. En caso de que no las reintegre, inicio del procedimiento de recuperación:
 - Comunicación al interesado del inicio del procedimiento de recuperación, envío del borrador de resolución y apertura del plazo de alegaciones.
 - Resolución de la autoridad competente para requerir el ingreso del importe a recuperar en un plazo.
 - Caso de que no se produzca el ingreso, comunicación a la AEAT para que inicie su procedimiento de recuperación.
- 4º. Reintegro a la Comisión de los importes irregulares recuperados.

Además de todas las herramientas planteadas, el seguimiento de las medidas de comunicación de la financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia resulta relevante para un uso eficiente de los recursos, así como permitir una mayor transparencia administrativa y de información que requieren las actuaciones financiadas por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de Europa, permitiendo una gestión ágil de los datos para comprobaciones de seguimiento y posterior difusión del cumplimiento de los hitos vinculados.

7. PREVENCIÓN DEL CONFLICTO DE INTERÉS

DEFINICIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS

El artículo 61 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, proporciona la siguiente definición de conflicto de intereses para el gasto y la gestión del presupuesto de la Unión Europea:

“1. Los agentes financieros con arreglo al capítulo 4 del presente título, y otras personas, incluidas las autoridades nacionales de cualquier rango, que participen en la ejecución del presupuesto de forma directa, indirecta y compartida en la gestión, incluidos los actos preparatorios al respecto, la auditoría o el control, no adoptarán ninguna medida que pueda acarrear un conflicto entre sus propios intereses y los de la Unión. Adoptarán asimismo las medidas oportunas para evitar un conflicto de intereses en las funciones que estén bajo su responsabilidad y para hacer frente a situaciones que puedan ser percibidas objetivamente como conflictos de intereses.

“2. Cuando exista el riesgo de un conflicto de intereses que implique a un miembro del personal de una autoridad nacional, la persona en cuestión remitirá el asunto a su superior jerárquico. Cuando se trate de personal al que se aplica el Estatuto, la persona en cuestión remitirá el asunto al ordenador correspondiente por delegación. El superior jerárquico correspondiente o el ordenador por delegación confirmarán por escrito si se considera que existe un conflicto de intereses. Cuando se considere que existe un conflicto de intereses, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos o la autoridad nacional pertinente velará por que la persona de que se trate cese toda actividad en ese asunto. El ordenador por delegación que corresponda o la autoridad nacional pertinente velará por que se adopte cualquier medida adicional de conformidad con el Derecho aplicable.

3. A los efectos del apartado 1, existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones de los agentes financieros y demás personas a que se refiere el apartado 1 se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés económico o por cualquier otro motivo directo o indirecto de interés personal”.

Atendiendo a la situación que motivaría el conflicto de intereses, puede distinguirse entre:

- a) **Conflicto de Intereses Aparente:** se produce cuando los intereses privados de un empleado público o beneficiario son susceptibles de comprometer el ejercicio objetivo de sus funciones u obligaciones, pero finalmente no se encuentra un vínculo identificable e individual con aspectos concretos de la conducta, el comportamiento o las relaciones de la persona (o una repercusión en dichos aspectos).
- b) **Conflicto de Intereses Potencial:** surge cuando un empleado público o beneficiario tiene intereses privados de tal naturaleza, que podrían ser susceptibles de ocasionar un conflicto de intereses en el caso de que tuvieran que asumir en un futuro determinadas responsabilidades oficiales.
- c) **Conflicto de Intereses Real:** implica un conflicto entre el deber público y los intereses privados de un empleado público o en el que el empleado público tiene intereses personales que pueden influir de manera indebida en el desempeño de sus deberes y responsabilidades oficiales. En el caso de un beneficiario implicaría un conflicto entre las obligaciones contraídas al solicitar la ayuda de los fondos y sus intereses privados que pueden influir de manera indebida en el desempeño de las citadas obligaciones.

Alcance del Conflicto de Interés

Definido el concepto de conflicto de interés debe especificarse el alcance del mismo en sus distintos ámbitos de aplicación según aparecen recogidos en el Anexo III.C de la Orden 1030/2021 de 29 de septiembre, sobre medidas de prevención, detección y corrección del fraude, corrupción y conflicto de intereses:

- Es aplicable a todas las partidas administrativas y operativas en todas las Instituciones de la UE y todos los métodos de gestión.
- Cubre cualquier tipo de interés personal, directo o indirecto.
- Ante cualquier situación que se «perciba» como un potencial conflicto de intereses se debe actuar.
- Las autoridades nacionales, de cualquier nivel, deben evitar y/o gestionar los potenciales conflictos de intereses.

Siendo según la mencionada Orden además los posibles actores implicados:

- Los empleados públicos que realizan tareas de gestión, control y pago y otros agentes en los que se han delegado alguna/s de esta/s función/es.
- Aquellos beneficiarios privados, socios, contratistas y subcontratistas, cuyas actuaciones sean financiadas con fondos, que puedan actuar en favor de sus propios intereses, pero en contra de los intereses financieros de la UE, en el marco de un conflicto de intereses.

El respeto de los principios de transparencia, igualdad de trato o no discriminación en la contratación pública exige abordar debidamente el tratamiento de los conflictos de intereses ya que de otro modo pueden tener un impacto en la regularidad de los procedimientos. En este sentido, el Organismo Intermedio promoverá y verificará que los organismos beneficiarios disponen de una adecuada política para gestionar los conflictos de intereses si bien, al igual que en el caso anterior, teniendo en cuenta si los empleados de estos organismos tienen o no la consideración de empleados públicos.

Los empleados públicos, además de regirse por el Código Ético y de Conducta contemplado en el Estatuto Básico del Empleado Público (que establece los principios de objetividad, imparcialidad, integridad, neutralidad, honradez, etc.), se someten a un régimen jurídico que les obliga a abstenerse de intervenir en un procedimiento cuando existan circunstancias susceptibles de dar lugar a un conflicto de interés y, que permite, asimismo, recusar su intervención en las citadas circunstancias.

El régimen de abstención y recusación, actualmente regulado en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, está firmemente arraigado en la legislación administrativa española y sólidamente consolidado en la cultura organizativa, por lo que la existencia de un conflicto de interés sólo se puede desprender cuando hay una abstención expresa del empleado. Por otra parte, la falta de cumplimiento del deber de abstención puede dar lugar a la exigencia de responsabilidades disciplinarias, estando tipificada como falta grave en el artículo 7.1.g) del Reglamento de Régimen Disciplinario. Estas normas son conocidas por todos los funcionarios, por lo que el hecho de la no abstención se considera suficiente y equivalente al “certificado de no existencia de conflicto de interés”.

En el caso de organismos beneficiarios cuyos empleados no tengan la condición de empleados públicos, el Organismo Responsable promoverá la adopción, junto a los códigos de conducta, de sistemas de gestión de los conflictos de intereses.

Casos posibles que suponen un conflicto de interés

El artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen jurídico del Sector Público señala que **las autoridades y personal de las administraciones** se deben abstener de participar en un procedimiento y **deben advertirlo a su superior** cuando:

- Tengan **interés personal** en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.
- Tengan un **vínculo matrimonial** o situación de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato.
- Exista **amistad íntima** o **enemistad** manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior.
- Hayan intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.
- Hayan tenido relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar.

En el mismo sentido, el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, señala en su artículo 61 que los agentes financieros, incluidas autoridades nacionales que participen en la ejecución del presupuesto, incluidos aquellos que intervengan en los actos preparatorios, control y auditoría, no adoptarán ninguna medida que pueda acarrear un conflicto entre sus propios intereses y los de la Unión. Adoptarán asimismo las medidas oportunas para evitar un conflicto de intereses en las funciones que estén bajo su responsabilidad y para hacer frente a situaciones que puedan ser percibidas objetivamente como conflictos de intereses.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL CONFLICTO DE INTERÉS

Una vez detectado un posible caso de conflicto de interés bien por declaración de las propias personas de las autoridades nacionales que intervienen en la ejecución de los fondos del PRTR, o por alegación o información que aluda a uno de los supuestos mencionados deberán establecerse las medidas oportunas.

Medida 1 - Mapa Riesgos y Check-list sobre Conflicto de Intereses

Las entidades ejecutoras identificarán las acciones que sean susceptibles de ser objeto de Conflicto de Intereses, al objeto de comprobar que se han establecido las medidas necesarias para evitar esta situación en las fases posteriores de gestión y control. Este Mapa de Riesgos establecerá una puntuación a cada uno de los riesgos identificados mediante una prospección previa de datos extraídos de experiencias previas donde se hayan dado sucesos identificados como Conflicto de Intereses. La puntuación del mapa de riesgos facilitará la correcta elaboración del Check-list.

La fase de diseño de cada acción deberá plantear y conformar en primera instancia el Check-list sobre Conflicto de Intereses al objeto de que todos los elementos que regula las acciones vinculadas cuenten desde su inicio con los instrumentos suficientes para actuar de forma preventiva.

Este Mapa de Riesgos será comunicado a todo el personal del departamento ministerial con el objetivo de su divulgación para un progresivo aprendizaje, permitiendo una detección previa de posibles Conflicto de Intereses en sus actuaciones ordinarias.

Medida 2 - Procedimiento de gestión del Conflicto de Intereses

Cuando exista el riesgo de un conflicto de intereses la persona en la que concurran las circunstancias de conflicto remitirá el asunto a su superior jerárquico, quien confirmará por escrito si se considera que existe un conflicto de intereses.

Cuando se considere que existe un conflicto de intereses, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos o la autoridad nacional pertinente velará por que la persona de que se trate cese toda actividad en ese asunto. También propondrá cualquier medida adicional.

Existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones de los agentes financieros y demás personas se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés económico o por cualquier otro motivo directo o indirecto de interés personal como se han descrito en el apartado anterior.

Ante todo lo expuesto anteriormente, se procederá a la elaboración de un procedimiento que evite la existencia de conflictos de intereses dentro de la ejecución de aquellas actuaciones necesarias para la ejecución de los proyectos financiados con cargo al Fondo. Este procedimiento ha de ser sencillo

Medida 3 - Régimen de Incompatibilidades

La incompatibilidad de los empleados públicos es una prohibición general de una segunda actividad laboral remunerada, con excepciones reguladas por la ley. De acuerdo con la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, así como la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, se establece un régimen de incompatibilidades generales de aplicación para los empleados públicos para evitar de forma preventiva posibles conflictos de interés en sus actuaciones.

De este modo, se establece un sistema de autorizaciones previas para evitar que los empleados públicos realicen actividades relacionadas con su función administrativa o que tengan algún tipo de interés vinculado a sus funciones como su pertenencia a Consejos de administración o una participación superior a un 10 por ciento en empresas concesionarias, contratistas o administradoras de monopolio o con participación pública, como identifica el artículo 12.1 de Ley 53/1984, de 26 de diciembre. Este sistema tiene como elemento central la Oficina de Conflicto de Interés encargada de recibir y analizar las declaraciones de actividades, bienes y derechos de los altos cargos antes de la toma de posesión de su puesto, así como analizar y comunicar las consultas de incompatibilidades que reciben de los empleados públicos.

Medida 4 - Procedimiento para la Declaración de ausencia de conflicto de interés (DACI)

Afecta a todas las actividades relacionadas con la ejecución de presupuesto que vaya a ser financiado y presentado a financiación con cargo al Fondo independientemente del instrumento jurídico para su tramitación.

Se cumplimentará por todos los intervinientes en los procedimientos de ejecución del PRTR, en todo caso por:

- El responsable del órgano de contratación/concesión de subvención
- Miembros de los comités u órganos colegiados del procedimiento
- Personal que redacte los documentos de licitación/bases y/o convocatorias
- Miembros del comité de evaluación de las solicitudes/ofertas/propuestas
- Personal técnico que evalúen las ofertas/propuestas
- Personal que participe en la gestión económica del expediente

En caso de órganos colegiados, dicha declaración podrá hacer de forma simultánea junto al inicio de cualquier reunión. Será suscrita por todos los intervinientes en la misma y se reflejará en el Acta.

El modelo propuesto a cumplimentar se corresponde con el del Anexo VII del presente Plan. No obstante, puede ser reemplazado por la mención que se considere precisa para la constatación de la ausencia de conflicto de interés individual o colectivo dentro de un órgano colegiado/ mesa o junta de contratación, o en la concesión de subvenciones.

Medida 5 - Formación en materia de conflicto de interés

Las personas intervinientes en los distintos procesos deben conocer las situaciones posibles, las consecuencias y los recursos con que cuentan para manejar una posible situación de conflicto de interés.

La propia declaración por los interesados de esta situación es una medida que evita una situación irregular, pero para lo cual debe contarse con la formación e información precisa.

Junto con la Medida 15 se realizarán talleres y jornadas formativas en esta materia.

8. PREVENCIÓN DE LA DOBLE FINANCIACIÓN

DEFINICIÓN

El Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión (Reglamento Financiero) establece expresamente en su artículo 188 la prohibición de la doble financiación como principio general aplicable a las subvenciones, señalando en el artículo 191 que «En ningún caso podrán ser financiados dos veces por el presupuesto los mismos gastos».

El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia establece que:

- Con el fin de garantizar una asignación eficiente y coherente de los fondos y de respetar el principio de buena gestión financiera, las acciones previstas en el presente Reglamento deben ser coherentes con los programas de la Unión en curso y complementarlos, así como evitar la doble financiación procedente del Mecanismo y de otros programas de la Unión de los mismos gastos.
- Las reformas y los proyectos de inversión financiados con arreglo al Mecanismo deben poder recibir financiación de otros programas e instrumentos de la Unión, siempre que dicha ayuda no cubra el mismo coste.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia propone una gobernanza por la que se establece un sistema de control global e integrado de gobernanza que descansa en la estructura organizativa, los mecanismos y herramientas del control ordinario de los gastos públicos con tres niveles o líneas de defensa:

1. En primer lugar, el **control por los propios gestores** y los sistemas de apoyo, con un sistema informático integrado de gestión del Plan, que permitirá el almacenamiento y el seguimiento de toda la información relacionada, facilitando también el acceso a esta información de los órganos de control de la Comisión, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), fiscalía o Tribunal de Cuentas Europeo.
2. Un segundo nivel encomendado a **órganos independientes** de la propia gestión (servicio jurídico, IGAE y otros órganos de control interno).

3. Y un tercer nivel, de control ex-post mediante **auditorías**, siendo la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) la Autoridad de Control del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Contando con un desarrollo posterior del sistema informático de gestión del Plan que será diseñado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública dentro del nivel 1 de control, en el momento actual, deben definirse las medidas necesarias para garantizar que la declaración de gestión a realizar por cada órgano responsable del departamento cuenta con un soporte justificativo adecuado.

La Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aborda la doble financiación en su artículo 7. Compatibilidad con el régimen de ayudas de Estado y prevención de la doble financiación.

Posteriormente, el Anexo III.D de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, recoge una referencia específica sobre doble financiación en el marco del PRTR:

- i. *La financiación procedente del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia es compatible con la de otros programas e instrumentos de la UE, siempre que la ayuda no cubra el mismo coste, es decir, siempre que no exista doble financiación (Considerando 62 y artículo 9), sin perjuicio de lo que pudiera establecer a este respecto el Acuerdo de Financiación entre la UE y el Reino de España.*
- ii. El Plan de recuperación y resiliencia debe incluir una explicación de los planes, los sistemas y las medidas concretas del Estado miembro para evitar la doble financiación procedente del Mecanismo y de otros programas de la Unión (Considerando 39 y artículo 18.4).
- iii. A la hora de evaluar el Plan, la Comisión evaluará «las disposiciones destinadas a evitar la doble financiación procedente del Mecanismo y de otros programas de la Unión» (artículo 19)
- iv. A la solicitud de pago se debe adjuntar «una **declaración de gestión** en la que se indique que [...] los fondos se han gestionado de conformidad con todas las normas aplicables, en particular las normas relativas a la prevención de conflictos de intereses, del fraude, de la corrupción y de la doble financiación procedente del Mecanismo y de otros programas de la

Unión, de conformidad con el principio de buena gestión financiera»
(artículo 22).

Con carácter general, el Estado Miembro debe contar con un sistema de control interno que, entre otras cuestiones, incluya procedimientos que aseguren que los fondos se han gestionado de acuerdo con las normas que eviten la doble financiación. En esa misma línea, el Estado Miembro podría tener la obligación de llevar a cabo verificaciones de gestión a través de las cuales las autoridades designadas para implementar el Plan comprueben la ausencia de doble financiación, todo ello con independencia de lo que pudiera establecer a este respecto el Acuerdo de Financiación entre la UE y el Reino de España.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español recoge expresamente el control de la doble financiación en su apartado 4.6, relativo a «Control y Auditoría». En dicho apartado se especifica que la doble financiación «en el caso de las subvenciones públicas, no sólo alcanza a la doble financiación comunitaria, sino a cualquier exceso de financiación que pudiera producirse con independencia de su origen».

En el primer nivel de control, la responsabilidad de la consideración, evaluación y seguimiento de este criterio específico del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia recae en los órganos que diseñan y ejecutan los proyectos del Plan siendo necesario el establecimiento de la mediad procedimental precisa para evitar una doble financiación.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LA DOBLE FINANCIACIÓN

Esta circunstancia debe abordarse en todas las fases de planificación, gestión y control de las acciones financiadas mediante el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia por los órganos que diseñan y ejecutan los proyectos y subproyectos del PRTR.

Las medidas expuestas a continuación constituyen un **Procedimiento integrado sobre prevención de la Doble Financiación** compuesto por conjunto de fases sucesivas:

Medida 1 - Mapa Riesgos y Check-list sobre Doble Financiación

Las entidades ejecutoras identificarán las acciones que sean susceptibles de doble financiación, al objeto de comprobar que se han establecido las medidas necesarias para evitar esta situación en las fases posteriores de gestión y control.

La fase de diseño de cada acción deberá plantear y conformar en primera instancia el Check-list sobre doble financiación al objeto de que Pliegos de Órdenes de Bases Regulatoras de subvenciones cuenten de partida con los instrumentos suficientes para actuar de forma preventiva.

Asimismo, en la fase de diseño cada Unidad Tramitadora evaluará la compatibilidad de la medida con la financiación mediante distintos instrumentos nacionales o europeos sin incurrir en doble financiación, como se recoge en el propio Check-list.

De esta forma podrá cumplirse de antemano con la Instrucción del Interventor General de la administración del estado relativa al alcance y contenido del informe previo a la aprobación de las bases reguladoras de subvenciones que deben emitir las Intervenciones delegadas de acuerdo con el Artículo 17 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

El Check-list se aporta como Anexo VIII.

Medida 2 - Certificado del beneficiario de ausencia de Doble Financiación

En el caso de establecerse la incompatibilidad de las acciones financiadas con otros instrumentos y cuando la naturaleza de la actuación lo requiera, se recabará del beneficiario certificado con el formato recogido en el Anexo IX.

Medida 3 - Autoevaluación Entidad Gestora

En las labores de autocontrol de cada organismo responsable de medida, con ocasión de las solicitudes de desembolso se comprobará la información correspondiente a cada instrumento de ejecución del PRTR relativo a doble financiación, al efecto de comprobar la efectividad de las medidas adoptadas proponiendo en su caso la mejora del procedimiento establecido.



9. COMPATIBILIDAD DEL RÉGIMEN DE AYUDAS DE ESTADO

DEFINICIÓN

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia propone una gobernanza por la que se establece un sistema de control global e integrado que descansa en la estructura organizativa, los mecanismos y herramientas del control ordinario de los gastos públicos con tres niveles o líneas de defensa:

1. En primer lugar, el **control por los propios gestores** y los sistemas de apoyo, con un sistema informático integrado de gestión del Plan, que permitirá el almacenamiento y el seguimiento de toda la información relacionada, facilitando también el acceso a esta información de los órganos de control de la Comisión, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), fiscalía o Tribunal de Cuentas Europeo.
2. Un segundo nivel encomendado a **órganos independientes** de la propia gestión (servicio jurídico, IGAE y otros órganos de control interno).
3. Y un tercer nivel, de control ex-post mediante **auditorías**, siendo la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) la Autoridad de Control del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Contando con un desarrollo posterior del sistema informático de gestión del Plan que será diseñado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública dentro del nivel 1 de control, en el momento actual, deben definirse las medidas necesarias para garantizar que la declaración de gestión a realizar por cada órgano responsable del departamento cuenta con un soporte justificativo adecuado.

La Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aborda en su artículo 7 la Compatibilidad con el régimen de ayudas de Estado:

1. *La ejecución del PRTR debe respetar los límites establecidos en relación con las ayudas de Estado y la prevención de la doble financiación.*

2. El régimen de ayudas de Estado viene delimitado por los artículos 107 a 109 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en su normativa de desarrollo. El Considerando 8 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, señala que las inversiones privadas también podrían incentivarse a través de programas de inversión pública, en particular, instrumentos financieros, subvenciones y otros instrumentos, siempre que se respeten las normas en materia de ayudas estatales.

4. Las entidades que participen en la ejecución del PRTR deben aplicar procedimientos que permitan asegurar en todo momento el pleno respeto a la normativa relativa a las Ayudas de Estado, así como garantizar la ausencia de doble financiación.

Posteriormente la Orden recoge una referencia específica sobre Ayudas de Estado en el marco del PRTR:

Referencia sobre ayudas de Estado en el marco del PRTR

Introducción

a) El concepto de ayuda de Estado viene recogido en los artículos 107-109 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en su normativa de desarrollo.

b) El Considerando 8 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, señala que «Las inversiones privadas también podrían incentivarse a través de programas de inversión pública, en particular, instrumentos financieros, subvenciones y otros instrumentos, siempre que se respeten las normas en materia de ayudas estatales».

c) El apartado 4.6 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (España Puede), sobre control y auditoría, incluye expresamente las ayudas de Estado como parte de la acción de control en la ejecución de los fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

En el primer nivel de control la responsabilidad de la consideración, evaluación y seguimiento de este criterio específico del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia recae en los

órganos que diseñan y ejecutan los proyectos del Plan debiendo establecerse las medidas precisa para respetar la normativa en materia de ayudas estatales.

MEDIDAS DE COMPATIBILIDAD CON EL RÉGIMEN DE AYUDAS DE ESTADO

Debe abordarse esta circunstancia en todas las fases de planificación, gestión y control de las acciones financiadas mediante el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia a través de los órganos gestores como se recoge en el Anexo III.D Ayudas de Estado y Doble Financiación de la Orden 1030/2021 de 29 de septiembre.

Las medidas expuestas a continuación constituyen un **Procedimiento integrado sobre control de compatibilidad con el Régimen de Ayudas de Estado** compuesto por un conjunto de fases sucesivas:

Medida 1 - Mapa Riesgos y Check-list sobre acciones susceptibles de incompatibilidad con el régimen de ayudas de estado

Las entidades ejecutoras identificarán las acciones que sean susceptibles de ser objeto de Ayudas de Estado, al objeto de comprobar que se han establecido las medidas necesarias para evitar esta situación cuando sea preciso o evaluar su compatibilidad con la normativa estatal y comunitaria en las fases posteriores de gestión y control.

La fase de diseño de cada acción deberá plantear y cumplimentar en primera instancia el Checklist-sobre Ayudas de Estado (Anexo X) al objeto de que Pliegos de las Órdenes de Bases Regulatoras de subvenciones cuenten de partida con los instrumentos suficientes para actuar de forma preventiva y evaluar la compatibilidad de la medida con la normativa de Ayudas de Estado, como se recoge en el propio check-list del Anexo X del presente Plan.

De esta forma podrá cumplirse de antemano con la Instrucción del Interventor General de la administración del estado relativa al alcance y contenido del informe previo a la aprobación de las bases reguladoras de subvenciones que deben emitir las Intervenciones delegadas de acuerdo con el Artículo 17 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

El check-list se aporta como Anexo X del presente Plan.

Medida 2 - Certificado del beneficiario de ausencia de incompatibilidad con el régimen de Ayudas de Estado

En el caso de establecerse la incompatibilidad de las acciones financiadas con la normativa aplicable de Ayudas de Estado y cuando la naturaleza de la actuación lo requiera, se recabará del beneficiario certificado con el formato recogido en el Anexo XI del presente Plan.

Medida 3 - Autoevaluación Entidad Gestora

En las labores de autocontrol de cada organismo responsable de medida, con ocasión de las solicitudes de desembolso se comprobará la información correspondiente a cada instrumento de ejecución del PRTR relativo a Ayudas de Estado, al efecto de comprobar la efectividad de las medidas adoptadas proponiendo en su caso la mejora del procedimiento establecido.

10 REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PLAN

El presente Plan será revisado a propuesta de UMA cuando se detecte la necesidad de su modificación, bien sea como resultado de las auditorias o controles externos, como consecuencia de la modificación de la normativa o de los resultados de la autoevaluación.

En este caso, la Unidad dirigirá a la Subsecretaría del Departamento un informe motivado junto con la nueva propuesta de Plan.

En la introducción se ha planteado la necesidad de la realización de una evaluación periódica del Plan. Esta evaluación puede ser periódica de forma anual en función de la cuantificación del riesgo o ante la aparición de circunstancias que aconsejen su análisis. En ambos casos se debe establecerse el procedimiento para implantación de mejoras en el presente Plan y de las acciones a realizar.

Realizada la revisión de la evaluación de riesgos, o cuando las circunstancias lo aconsejen, la UMA podrá proponer acciones de mejora si la puntuación es igual o superior a la ya consolidada, o podrán ser impulsadas por la solicitud de los órganos responsables de las medidas que las entidades ejecutoras de su dependencia orgánica apliquen, que en todo caso incluirán un plazo concreto para su consecución.

En su caso, estas mismas medidas pueden hacerse extensivas al resto de entidades ejecutoras si es razonable y proporcionado los resultados a conseguir en términos de mejora en el desempeño de la función de control de gestión.

Las medidas a adoptar se asignarán conforme al siguiente cuadro de planificación.

Objetivo	Medida o acción	Servicio competente	Órgano/Entidad Responsable/Gestor/Ejecutora (según Orden HFP 1030/2021)	HyD afectados	Proyecto Subproyecto	Plazo	Indicador



ANEXOS

ANEXO I

DECLARACIÓN DEL SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

La Subsecretaría del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico es la responsable a nivel del Departamento de la Gestión de los proyectos presentados por el mismo para financiar al Fondo.

Uno de los principales objetivos es reforzar, dentro del ámbito de sus competencias, la política antifraude. Por ello quiere manifestar su compromiso con los estándares más altos en el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales y su adhesión a los más estrictos principios de integridad, objetividad y honestidad, de manera que su actividad sea percibida por todos los agentes que se relacionan con ella como opuesta al fraude y la corrupción en cualquiera de sus formas. Todos los miembros de su equipo asumen y comparten este compromiso.

Por otro lado, los empleados públicos que integran este Departamento tienen, entre otros deberes, el de *“velar por los intereses generales, con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico y actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres”* (Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, artículo 52).

El objetivo de esta política es promover dentro de la organización una cultura que desaliente toda actividad fraudulenta y que facilite su prevención y detección, promoviendo el desarrollo de procedimientos efectivos para la gestión de estos supuestos.

Esta Subsecretaría pondrá en marcha un procedimiento específico para la revisión y actualización periódica de la política antifraude, así como el seguimiento de los resultados. También cuenta con la colaboración de los diferentes responsables y gestores de los proyectos para asegurar que existe un adecuado sistema de control interno dentro de sus respectivas áreas

de responsabilidad y garantizar, en su caso, la debida diligencia en la implementación de medidas correctoras.

Esta Subsecretaría ha puesto en marcha medidas eficaces y proporcionadas de lucha contra el fraude, basadas en la experiencia obtenida en periodos anteriores. Adicionalmente, cuenta con procedimientos para denunciar aquellas irregularidades o sospechas de fraude que pudieran detectarse, bien a través de los canales internos de notificación bien directamente a la oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). Todos los informes se tratarán en la más estricta confidencialidad y de acuerdo con las normas que regulan la materia.

En definitiva, esta Subsecretaría tiene una política totalmente beligerante en la lucha frente al fraude y la corrupción y ha establecido un sistema de control robusto, diseñado especialmente para prevenir y detectar, en la medida de lo posible, los actos de fraude y corregir su impacto, en caso de producirse.

ANEXO II

CÓDIGO ÉTICO DEL PERSONAL INTERVINIENTE EN LA GESTIÓN DEL FONDO

Con fecha de 31 de octubre de 2015, se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

En dicho estatuto se encuentran señalados los principios éticos y el código de conducta en su capítulo VI. Dicho código es de obligatoria observación por los empleados público y constituye una unidad de principios suficiente para asegurar la conducta de todos los empleados públicos que forman parte de esta unidad:

CAPÍTULO VI. Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta

Artículo 52. Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta.

Los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y deberán actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres, que inspiran el Código de Conducta de los empleados públicos configurado por los principios éticos y de conducta regulados en los artículos siguientes. Los principios y reglas establecidos en este capítulo informarán la interpretación y aplicación del régimen disciplinario de los empleados públicos.

Artículo 53. Principios éticos.

1. Los empleados públicos respetarán la Constitución y el resto de normas que integran el ordenamiento jurídico.
2. Su actuación perseguirá la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos y se fundamentará en consideraciones objetivas orientadas hacia la imparcialidad y el interés común,



al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales, familiares, corporativas, clientelares o cualesquiera otras que puedan colisionar con este principio.

3. Ajustarán su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la Administración en la que presten sus servicios, y con sus superiores, compañeros, subordinados y con los ciudadanos.

4. Su conducta se basará en el respeto de los derechos fundamentales y libertades públicas, evitando toda actuación que pueda producir discriminación alguna por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo, orientación sexual, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

5. Se abstendrán en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal, así como de toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de plantear conflictos de intereses con su puesto público.

6. No contraerán obligaciones económicas ni intervendrán en operaciones financieras, obligaciones patrimoniales o negocios jurídicos con personas o entidades cuando pueda suponer un conflicto de intereses con las obligaciones de su puesto público.

7. No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada, por parte de personas físicas o entidades privadas.

8. Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia, y vigilarán la consecución del interés general y el cumplimiento de los objetivos de la organización.

9. No influirán en la agilización o resolución de trámite o procedimiento administrativo sin justa causa y, en ningún caso, cuando ello comporte un privilegio en beneficio de los titulares de los cargos públicos o su entorno familiar y social inmediato o cuando suponga un menoscabo de los intereses de terceros.

10. Cumplirán con diligencia las tareas que les correspondan o se les encomienden y, en su caso, resolverán dentro de plazo los procedimientos o expedientes de su competencia.

11. Ejercerán sus atribuciones según el principio de dedicación al servicio público absteniéndose no solo de conductas contrarias al mismo, sino también de cualesquiera otras que comprometan la neutralidad en el ejercicio de los servicios públicos.

12. Guardarán secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusión esté prohibida legalmente, y mantendrán la debida discreción sobre aquellos asuntos que conozcan por razón de su cargo, sin que puedan hacer uso de la información obtenida para beneficio propio o de terceros, o en perjuicio del interés público.



Artículo 54. Principios de conducta.

1. Tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes empleados públicos.
2. El desempeño de las tareas correspondientes a su puesto de trabajo se realizará de forma diligente y cumpliendo la jornada y el horario establecidos.
3. Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes.
4. Informarán a los ciudadanos sobre aquellas materias o asuntos que tengan derecho a conocer, y facilitarán el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.
5. Administrarán los recursos y bienes públicos con austeridad, y no utilizarán los mismos en provecho propio o de personas allegadas. Tendrán, asimismo, el deber de velar por su conservación.
6. Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal.
7. Garantizarán la constancia y permanencia de los documentos para su transmisión y entrega a sus posteriores responsables.
8. Mantendrán actualizada su formación y cualificación.
9. Observarán las normas sobre seguridad y salud laboral.
10. Pondrán en conocimiento de sus superiores o de los órganos competentes las propuestas que consideren adecuadas para mejorar el desarrollo de las funciones de la unidad en la que estén destinados. A estos efectos se podrá prever la creación de la instancia adecuada competente para centralizar la recepción de las propuestas de los empleados públicos o administrados que sirvan para mejorar la eficacia en el servicio.
11. Garantizarán la atención al ciudadano en la lengua que lo solicite siempre que sea oficial en el territorio.

ANEXO III

INDICADORES DE RIESGOS DE FRAUDE (BANDERAS ROJAS)

CONTRATOS

Pliegos rectores del procedimiento con incidencias a favor de un licitador:

- Presentación de una única oferta o número anormalmente bajo de proposiciones optando a la licitación.
- Extraordinaria similitud entre los pliegos rectores del procedimiento y los productos o servicios del contratista ganador;
- Quejas de otros licitadores;
- Pliegos con prescripciones más restrictivas o más generales que las aprobadas en procedimientos previos similares;
- Pliegos con cláusulas inusuales o poco razonables;
- El poder adjudicador define un producto de una marca concreta en lugar de un producto genérico.
- Ausencia de medidas de información y publicidad en la documentación relativa al procedimiento de contratación y/o insuficiencia de plazos para la recepción de ofertas

Licitaciones colusorias:

- La oferta ganadora es demasiado alta en comparación con los costes previstos, con las listas de precios públicas, con obras o servicios similares o promedios de la industria, o con precios de referencia del mercado;
- Todos los licitadores ofertan precios altos de forma continuada;
- Los precios de las ofertas bajan bruscamente cuando nuevos licitadores participan en el procedimiento;
- Los adjudicatarios se reparten/turnan por región, tipo de trabajo, tipo de obra;
- El adjudicatario subcontrata a los licitadores perdedores;
- Patrones de ofertas inusuales (por ejemplo, las ofertas tienen porcentajes exactos de rebaja, se oferta exactamente al presupuesto del contrato, los precios de las ofertas son demasiado altos, demasiado próximos, muy distintos, números redondos, incompletos, etc.);



- Conexiones aparentes entre licitadores, p. Direcciones comunes, personal, números teléfono, etc.
- El contratista incluye subcontratistas en su oferta que compiten por el contrato principal;
- Ciertas compañías siempre pugnan unas contra otras, otras nunca lo hacen;
- Los licitadores perdedores no pueden ser ubicados en Internet, directorios de negocios, no tienen dirección, etc., (en otras palabras, son ficticios);
- Correspondencia u otras indicaciones de que los contratistas intercambian información sobre precios, dividirse territorios, o de otra manera entrar en acuerdos informales;
- Se ha encontrado una licitación colusoria en los siguientes sectores y es también relevante en los fondos estructurales: pavimentación asfáltica, construcción de edificios, dragado, equipos eléctricos, techado, eliminación de residuos.

Conflicto de intereses:

- Favoritismo inexplicable o inusual de un contratista o vendedor en particular;
- Aceptación continua de altos precios y trabajo de baja calidad, etc.;
- El empleado encargado de contratación no presenta declaración de conflicto de interés o lo hace de forma incompleta;
- El empleado encargado de contratación declina ascenso a una posición en la que deja de tener que ver con adquisiciones;
- El empleado encargado de contratación parece hacer negocios propios por su lado;
- Socialización entre un empleado encargado de contratación y un proveedor de servicios o productos;
- Aumento inexplicable o súbito de la riqueza o nivel de vida del empleado encargado de contratación
- Comportamiento inusual por parte de un empleado que insiste en obtener información sobre el procedimiento de licitación sin estar a cargo del procedimiento
- Un empleado del órgano de contratación que haya trabajado para una empresa participa en el concurso de forma inmediatamente anterior a su incorporación al puesto de trabajo en el organismo adjudicador



Manipulación de las ofertas presentadas:

- Quejas de los licitadores;
- Falta de control e inadecuados procedimientos de licitación;
- Indicios de cambios en las ofertas después de la recepción;
- Ofertas excluidas por errores;
- Licitador capacitado descartado por razones dudosas;
- El procedimiento no se declara desierto y vuelve a convocarse pese a que se recibieron menos ofertas que el número mínimo requerido.
- Los criterios de adjudicación no están suficientemente detallados o no se encuentran recogidos en los pliegos
- La admisión de ofertas económicas sin haber descartado previamente a los licitadores que incumplen los requisitos técnicos y/o administrativos

Fraccionamiento del gasto:

- Se aprecian dos o más adquisiciones con similar objeto efectuadas a idéntico adjudicatario por debajo de los límites admitidos para la utilización de procedimientos de adjudicación directa o de los umbrales de publicidad o que exigirían procedimientos con mayores garantías de concurrencia;
- Separación injustificada de las compras, por ejemplo, contratos separados para mano de obra y materiales, estando ambos por debajo de los umbrales de licitación abierta;
- Compras secuenciales justo por debajo de umbrales de obligación de publicidad de las licitaciones.

Mezcla de contratos

- Facturas similares presentadas en diferentes empleos o contratos;
- El contratista factura más de un puesto de trabajo para el mismo período.

Carga errónea de costes

- Manipulación de los costes de mano de obra creando hojas de tiempo ficticias, alterando hojas de tiempo o la documentación justificativa.
- Cargas laborales excesivas o inusuales;
- Cargas laborales incompatibles con el progreso del contrato;



- Cambios aparentes en las hojas de tiempos;
- No se pueden encontrar hojas de tiempo;
- Los mismos costes materiales imputados a más de un contrato;
- Cobrar los costes indirectos como costes directos.

Irregularidades en la formalización del contrato

- El contrato formalizado altera los términos de la adjudicación
- Falta de coincidencia entre el adjudicatario y el firmante del contrato
- Demoras injustificadas para firmar el contrato entre el organismo de contratación y el adjudicatario
- Inexistencia de contrato
- Incumplimiento de las obligaciones o irregularidades en la prestación que beneficien al adjudicatario
- Pérdida de pista de auditoría

SUBVENCIONES

Riesgo 1. Limitación de la concurrencia

- El organismo no ha dado la suficiente difusión a las bases reguladoras/convocatoria: La publicación de las bases reguladoras/convocatoria no se ha realizado para garantizar la máxima difusión de las mismas, sin contribuir de esta manera a los principios de publicidad y transparencia. Esta bandera puede producirse por la falta de difusión de las mismas en los medios obligatorios establecidos en la Ley General de Subvenciones cuando se trata de organismos públicos y/o en otros medios de difusión (Boletines Oficiales, portal web, prensa, etc.). Según el art.9.3 de la Ley General de Subvenciones, los organismos públicos deben publicar las bases reguladoras de cada tipo de subvención en el "Boletín Oficial del Estado" o en el diario oficial correspondiente. Según el art.17.8 de la Ley General de Subvenciones, las administraciones concedentes deben comunicar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) el texto de la convocatoria y la información requerida por la Base de Datos. Posteriormente, la BDNS dará traslado al diario oficial correspondiente del extracto de la convocatoria, para su publicación, que tendrá carácter gratuito. No cumplir esto será causa de anulabilidad de la convocatoria.
- El organismo no ha definido con claridad en la convocatoria los requisitos que deben cumplir los beneficiarios/destinatarios de las ayudas/subvenciones: Los requisitos que deben cumplir los beneficiarios/destinatarios de las ayudas no quedan claros o son ambiguos para una correcta y exacta interpretación, lo cual puede derivar en que potenciales beneficiarios opten por no presentarse a la convocatoria, o bien derive en la selección deliberada de un determinado beneficiario.
- No se han respetado los plazos establecidos en las bases reguladoras/ convocatoria para la presentación de solicitudes: Rechazo o inadmisión de una solicitud de ayuda por supuesta entrega de la misma fuera plazo cuando de forma efectiva ha sido presentada en plazo, o bien aceptación de una o varias solicitudes presentadas fuera de plazo. En tales casos, los plazos establecidos en las bases reguladoras/convocatoria no se han cumplido en lo relativo a la presentación de las solicitudes.
- En el caso de subvenciones concedidas en base a baremos se produce la ausencia de publicación de los mismos en Boletines Oficiales correspondientes: En las publicaciones de las bases reguladoras de las convocatorias de las ayudas no se incluyen los baremos para valorar las diferentes solicitudes, incurriendo en una falta de objetividad y transparencia en la prelación de solicitudes.



- El beneficiario/destinatario de las ayudas incumple la obligación de garantizar la concurrencia en caso de que necesite negociar con proveedores: El beneficiario/destinatario de la ayuda o subvención que, en su caso, desee negociar o contratar a proveedores, no garantiza la elección de los mismos a través de un proceso de concurrencia competitiva. Según el procedimiento establecido al efecto en el art. 31.3 de la Ley General de Subvenciones, cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía del contrato menor, según la normativa de contratación pública, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores. En este caso, el riesgo también puede materializarse cuando los proveedores sean personas o entidades vinculadas con el beneficiario, según lo establecido en el art. 29.7 de la Ley General de Subvenciones.

Riesgo 2. Trato discriminatorio en la selección de los solicitantes

- Se incumplen los principios de objetividad, igualdad y no discriminación en la selección de beneficiarios: El organismo otorgante no sigue un criterio homogéneo para la selección de beneficiarios en los procedimientos de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, no recibiendo aquellos el mismo tratamiento y produciéndose, por tanto, un incumplimiento del procedimiento competitivo.

Riesgo 3. Conflictos de Intereses en el Comité de Evaluación

- 3.1. Influencia deliberada en la evaluación y selección de los beneficiarios: Los miembros del comité de evaluación influyen deliberadamente sobre la evaluación y selección de los solicitantes a fin de favorecer a alguno de ellos, dando un trato preferente a su solicitud durante la evaluación, o bien presionando a otros miembros del comité.

Riesgo 4. Incumplimiento del régimen de Ayudas de Estado

- 4.1. Las operaciones financiadas constituyen ayudas de estado y no se ha seguido el procedimiento de información y notificación establecido al efecto por la normativa europea: El organismo no ha comprobado que la ayuda pueda constituir ayuda de estado, según la normativa de la UE aplicable y no ha seguido el procedimiento de comunicación

y notificación a la Comisión Europea (en el caso de MINIMIS no es necesario comunicar las ayudas a la Comisión)

Riesgo 5. Desviación del objeto de Subvención

- 5.1. Los fondos no han sido destinados a la finalidad establecida en la normativa reguladora de la subvención por parte del beneficiario: Los fondos de la subvención no se han destinado a la finalidad u objetivos recogidos en las bases reguladoras/convocatoria o no han sido ejecutados.

Riesgo 6. Incumplimiento del principio de adicionalidad

- 6.1. Se produce un exceso en la cofinanciación de las operaciones: El beneficiario recibe ayudas provenientes del mismo fondo pero de distintos organismos y se está produciendo un lucro o un exceso de cofinanciación. En este sentido, los beneficiarios no pueden recibir más financiación de lo que han gastado en cada operación. Esta bandera roja suele tener lugar cuando la cofinanciación se realiza mediante la recepción de importes fijos en vez de en porcentajes del gasto, conllevando un mayor riesgo de que se produzca un exceso en la cofinanciación.
- 6.2. Existen varios cofinanciadores que financian la misma operación: Las convocatorias de las ayudas deben definir la compatibilidad o incompatibilidad de las ayudas con otro tipo de financiación que provenga de otros Fondos EIE o de fuentes nacionales o autonómicas. En este caso, existe el riesgo de incumplimiento de las normas de adicionalidad.
- 6.3. No existe documentación soporte de las aportaciones realizadas por terceros (convenios, donaciones, aportaciones dinerarias de otra naturaleza, etc.): No existe documentación soporte de las aportaciones realizadas por terceros cuando, según lo establecido en las disposiciones reglamentarias de los Fondos EIE, de cada aportación para la cofinanciación debe existir documentación.
- 6.4. La financiación aportada por terceros no es finalista y no existe un criterio de reparto de la misma: Cuando en el convenio o acuerdo de financiación de terceros no se señala específicamente que las cuantías financiadas se destinan a operaciones del Fondo Social Europeo. La bandera roja también puede tener lugar cuando la cofinanciación se destina a otro fin distinto al objeto de la convocatoria.

- 6.5. Inexistencia de un control de los gastos e ingresos por operación por parte del beneficiario: No existe contabilidad analítica de forma que se pueda llevar un control documentado de gastos e ingresos por tipo de operación, tipo de proyecto, o fuente de financiación.

Riesgo 7. Falsedad documental

- 7.1. Documentación falsificada presentada por los solicitantes al objeto de salir elegidos en un proceso de selección: Los solicitantes presentan declaraciones falsas en sus solicitudes, haciendo creer al comité de evaluación que cumplen con los criterios de elegibilidad, generales y específicos. La falsificación puede versar sobre cualquier documentación requerida en la solicitud para la obtención de la ayuda: declaraciones firmadas, información financiera, compromisos, etc.
- 7.2. Manipulación del soporte documental de justificación de los gastos: Cuando se manipulan facturas o se presentan facturas falsas para el reembolso de los gastos incurridos en la operación subvencionada.

Riesgo 8. Incumplimiento de las obligaciones establecidas por la normativa nacional y comunitaria en materia de información y publicidad

- 8.1. Incumplimiento de los deberes de información y comunicación del apoyo del FSE a las operaciones cofinanciadas: Tanto el organismo que realiza una convocatoria como los destinatarios finales están compelidos a informar y difundir que dichas ayudas u operaciones están financiadas con cargo al FSE, y deben cumplir lo establecido en las disposiciones comunitarias al respecto (Art. 115 RDC).

Riesgo 9. Pérdida de pista de auditoría

- 9.1. El organismo no ha realizado una correcta documentación de la operación que permita garantizar la pista de auditoría: En el expediente de la operación no quedan documentados los procesos que permiten garantizar la pista de auditoría. Algunos ejemplos son la disposición de procesos de gastos, procesos de pagos, procesos de contabilidad, de publicidad y de ejecución, entre otros.

- 9.2. La convocatoria no establece con precisión la forma en que deben documentarse los distintos gastos derivados de la operación: La convocatoria no establece con precisión la forma en que deben documentarse los distintos gastos (requisitos para la justificación de los gastos, dependiendo de la naturaleza del gasto), según lo establecido en el art. 131 del RDC. Algunos ejemplos son los documentos, facturas o documentos con valor probatorio análogo, establecido en la normativa correspondiente propia o nacional.
- 9.3. La convocatoria no define de forma clara y precisa los gastos elegibles: La convocatoria no define de forma clara y precisa qué gastos son subvencionables, de acuerdo a lo establecido en el art. 65 del RDC, y que podrán ser, por tanto, certificados por la Autoridad de Certificación.
- 9.4. La convocatoria no establece con precisión el método de cálculo de costes que debe aplicarse en las operaciones: El organismo no ha establecido de forma clara el método de cálculo de costes a aplicar en las operaciones de acuerdo a lo establecido en el art. 67 del RDC.

ANEXO IV

INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD

De acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2 del REGLAMENTO (UE) 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia:

Los perceptores de fondos de la Unión harán mención del origen de esta financiación y velarán por darle visibilidad, incluido, cuando proceda, mediante el emblema de la Unión y una declaración de financiación adecuada que indique «financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU», en particular cuando promuevan las acciones y sus resultados, facilitando información coherente, efectiva y proporcionada dirigida a múltiples destinatarios, incluidos los medios de comunicación y el público.

A fin de cumplir con lo previsto en el citado artículo, cualquier unidad del Ministerio hará mención a tanto a la declaración como al emblema en cualquiera de los documentos de un procedimiento financiado con cargo al Fondo.

Los proyectos que se ejecuten bajo el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia deben mostrar el logotipo oficial del Plan, además del emblema de la Unión Europea acompañado del texto "Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU" según se establece en el Manual de Identidad visual del PRTR: <https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual>

La Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en su artículo 9. Comunicación establece las bases para el desarrollo de la estrategia de comunicación de los fondos provenientes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

ANEXO V

CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS

Se reflejan el Artículo 132 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión:

Artículo 132

Conservación de documentos

- 1. Los perceptores mantendrán un registro y conservarán los documentos justificativos, los datos estadísticos y demás documentación concerniente a la financiación, así como los registros y documentos en formato electrónico, durante un período de cinco años a partir del pago del saldo o, a falta de dicho pago, de la operación. Este período será de tres años si la financiación es de un importe inferior o igual a 60 000 EUR.*
- 2. Los registros y documentos relativos a auditorías, recursos, litigios, la tramitación de reclamaciones relativas a compromisos jurídicos o relativos a investigaciones de la OLAF se conservarán hasta que dichas auditorías, recursos, litigios, tramitación de reclamaciones o investigaciones hayan concluido. En el caso de los registros y documentos relativos a investigaciones de la OLAF, la obligación de conservar los registros y documentos se aplicará una vez que dichas investigaciones hayan sido notificadas al perceptor.*
- 3. Los registros y documentos se conservarán, bien en forma de originales, bien en forma de copias compulsadas de originales, bien en soportes de datos comúnmente aceptados, entre ellos versiones electrónicas de documentos originales o documentos existentes únicamente en versión electrónica. Cuando existan versiones electrónicas, no serán necesarios originales si dichos documentos cumplen los requisitos legales aplicables para que puedan ser considerados equivalentes a originales y fiables a efectos de auditoría.*

Con el fin de atender a esta obligación, se crea una Unidad de red específica donde se almacenarán todos los archivos que se elaboren en la gestión del presente documento planificador. Será responsable del almacenamiento la Unidad gestora del proyecto y de la conservación de los documentos.

ANEXO VI

AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN DE RIESGO DE FRAUDE

(A cumplimentar por la entidad ejecutora)

El artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 señala en su punto 1 que: "los Estados miembros establecerán un sistema de control interno eficaz y eficiente y recuperarán los importes abonados erróneamente o utilizados de modo incorrecto".

En el mismo artículo, la disposición segunda indica que los Estados Miembros deben "tomar las medidas oportunas para prevenir, detectar y corregir el fraude, la corrupción y los conflictos de intereses según se definen en el artículo 61, apartados 2 y 3, del Reglamento Financiero que afecten a los intereses financieros de la Unión y ejercitar acciones legales para recuperar los fondos que hayan sido objeto de apropiación indebida, también con respecto a cualquier medida para la ejecución de las reformas y los proyectos de inversión en el marco del plan de recuperación y resiliencia."

En desarrollo de las medidas anteriores, los Estados Miembros deben desarrollar un planteamiento proactivo, estructurado y específico para gestionar el riesgo de fraude. En particular, deben centrar su objetivo en una respuesta proporcionada ante el posible fraude, adaptándola a las situaciones concretas que existan.

De acuerdo con el artículo 59, apartado 2, del Reglamento Financiero, los Estados miembros deben tomar todas las medidas necesarias, incluidas medidas legislativas, reglamentarias y administrativas, para proteger los intereses financieros de la UE, especialmente mediante la prevención, detección y corrección de las irregularidades y el fraude.

La Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia establece para los órganos gestores, la obligación de evaluación de riesgo de fraude.

Se propone a los órganos gestores para la realización de esta autoevaluación tener en cuenta el documento EGESIF_14-0021-00 de 16/06/2014 de Orientaciones para los Estados miembros y

las autoridades responsables de los programas para la Evaluación del riesgo de fraude y medidas efectivas y proporcionadas contra el fraude, adaptado o ampliado a las circunstancias de cada gestor e instrumento de gestión (contrato/subvención/encargo a medios propios/convenios) sin perjuicio de otras herramientas que puedan desarrollarse para este fin.

La mencionada evaluación permitirá a la entidad decisora completar el cuestionario se recoge a continuación el Anexo II.B.5 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.

PREGUNTA	GRADO DE CUMPLIMIENTO			
	1	2	3	4
1. ¿Se dispone de un «Plan de medidas antifraude» que le permita a la entidad ejecutora o a la entidad decisora garantizar y declarar que, en su respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes se han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses?				
2. ¿Se constata la existencia del correspondiente «Plan de medidas antifraude» en todos los niveles de ejecución?				
Prevención				
3. ¿Dispone de una declaración, al más alto nivel, donde se comprometa a luchar contra el fraude?				
4. ¿Se realiza una autoevaluación que identifique los riesgos específicos, su impacto y la probabilidad de que ocurran y se revisa periódicamente?				
5. ¿Se difunde un código ético y se informa sobre la política de obsequios?				
6. ¿Se imparte formación que promueva la Ética Pública y que facilite la detección del fraude?				
7. ¿Se ha elaborado un procedimiento para tratar los conflictos de intereses?				
8. ¿Se cumplimenta una declaración de ausencia de conflicto de intereses por todos los intervinientes?				

Detección				
9. ¿Se han definido indicadores de fraude o señales de alerta (banderas rojas) y se han comunicado al personal en posición de detectarlos?				
10. ¿Se utilizan herramientas de prospección de datos o de puntuación de riesgos?				
11. ¿Existe algún cauce para que cualquier interesado pueda presentar denuncias?				
12. ¿Se dispone de alguna Unidad encargada de examinar las denuncias y proponer medidas?				
Corrección				
13. ¿Se evalúa la incidencia del fraude y se califica como sistémico o puntual?				
14. ¿Se retiran los proyectos o la parte de los mismos afectados por el fraude y financiados o a financiar por el MRR?				
Persecución				
15. ¿Se comunican los hechos producidos y las medidas adoptadas a la entidad ejecutora, a la entidad decisora o a la Autoridad Responsable, según proceda?				
16. ¿Se denuncian, en los casos oportunos, los hechos punibles a las Autoridades Públicas nacionales o de la Unión Europea o ante la fiscalía y los tribunales competentes?				
Subtotal puntos.				
Puntos totales.				
Puntos máximos.				
Puntos relativos (puntos totales/puntos máximos).				



ANEXO VII

MODELO DE DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES

(A cumplimentar por todos los intervinientes en los procedimientos de ejecución del PRTR)

Expediente:

Contrato/ subvención

Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratación/subvención arriba referenciado, el/los abajo firmante/s, como participante/s en el proceso de preparación y tramitación del expediente, **DECLARA/DECLARAN:**

PRIMERO: Estar informado/s de lo siguiente:

Que el **artículo 61.3 “Conflicto de intereses”**, del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE), establece que *“existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés económico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal”*.

Que el **artículo 23 “Abstención”**, de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece que deberán abstenerse de intervenir en el procedimiento *“las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas en el apartado siguiente”*, siendo éstas:

- a. *Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.*
- b. *Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato.*



- c. *Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior.*
- d. *Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.*
- e. *Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar”.*

SEGUNDO: Que no se encuentra/n incurso/s en ninguna situación que pueda calificarse de conflicto de intereses de las indicadas en el artículo 61.3 del Reglamento Financiero de la UE y que no concurre en su/s persona/s ninguna causa de abstención del artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público que pueda afectar al procedimiento de licitación.

TERCERO: Que se compromete/n a poner en conocimiento del órgano de contratación, sin dilación, cualquier situación de conflicto de intereses o causa de abstención que dé o pudiera dar lugar a dicho escenario.

(fecha y firma)



ANEXO VIII DOBLE FINANCIACIÓN

(A cumplimentar por la entidad ejecutora)

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN

CUESTIONARIO DE CONTROL	SI	NO	NO PROCEDE
1. ¿Está previsto que el proyecto financiado con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia reciba también financiación de otros instrumentos, ya sean nacionales o europeos?			
Continúe únicamente si se ha marcado «SÍ» en la pregunta 1. 2. ¿Existe documentación acreditativa (por ejemplo, facturas o certificaciones del órgano gestor) de que la financiación procedente de otros instrumentos no se ha empleado en cubrir los mismos costes financiados con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia?			
3. ¿Las actuaciones financiadas con fondos del Mecanismo de Recuperación Resiliencia y las financiadas con otros instrumentos han quedado reflejadas en el correspondiente sistema operativo de gestión (por ejemplo, la Base de Datos Nacional de Subvenciones o la Plataforma de Contratación del Sector Público) o en otra base de datos con funciones de seguimiento y control (por ejemplo sistema ARACHNE)?			
4. ¿El proyecto cuenta con su propio Código Único de Identificación de Proyecto?			



ANEXO IX DOBLE FINANCIACIÓN

(A cumplimentar por la entidad ejecutora)

CERTIFICADO DE AUSENCIA DE DOBLE FINANCIACIÓN

DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE DOBLE FINANCIACIÓN

Don/Doña, con DNI, como titular
del órgano/ Consejero Delegado/Gerente/ de la entidad
....., con NIF
....., y domicilio fiscal en
.....

.....en la condición de órgano responsable/órgano gestor/órgano
ejecutor/beneficiaria de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR/ que participa
como contratista/ente destinatario del encargo/ subcontratista, en el desarrollo de actuaciones
necesarias para la consecución de los objetivos definidos en el Componente XX
«.....», manifiesta que el mismo no ha recibido ayuda de ningún Fondo de la
Unión Europea distinto del Mecanismos de Recuperación y Resiliencia ni va a ser presentado
a financiación de cualquier otro Fondo en un futuro cuyo presupuesto derive del presupuesto
nacional o de la UE.

Fecha y firma electrónica



ANEXO X AYUDAS DE ESTADO

(A cumplimentar por la entidad decisora)

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN RELACIÓN CON AYUDAS DE ESTADO

El concepto de ayuda de Estado viene recogido en los artículos 107-109 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en su normativa de desarrollo.

El Considerando 8 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, señala que «Las inversiones privadas también podrían incentivarse a través de programas de inversión pública, en particular, instrumentos financieros, subvenciones y otros instrumentos, siempre que se respeten las normas en materia de ayudas estatales».

El apartado 4.6 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (España Puede), sobre control y auditoría, incluye expresamente las ayudas de Estado como parte de la acción de control en la ejecución de los fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Con el fin de asegurar el cumplimiento de la normativa europea en materia de ayudas de Estado y de facilitar la elaboración de los preceptivos informes y declaraciones de gestión regulados en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, se incorpora en el expediente el cuestionario relativo a Ayudas de Estado conformado por la Unidad Tramitadora.

La responsabilidad de la consideración, evaluación y seguimiento de este criterio específico del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia recae en los órganos que diseñan y ejecutan los proyectos del Plan.

Procedimiento:

En la Unidad Tramitadora se designará un responsable con formación suficiente que evalúe si las inversiones cofinanciadas pueden considerarse Ayudas de Estado. El procedimiento requiere de una consideración previa a la tramitación del expediente mediante la cumplimentación de un

formulario, y en su caso, según la naturaleza del expediente, la recopilación de certificados por los beneficiarios. Por último, debe realizarse una evaluación final del impacto de las actuaciones cofinanciadas al objeto de certificar que no han producido impacto sobre la competencia no constituyendo Ayudas de Estado.

El responsable de la Unidad Tramitadora cumplimenta el cuestionario según anexo a este procedimiento.

El cuestionario se adjunta al expediente de tramitación económica de la actuación.

Cuando la naturaleza de la actuación lo requiera, se recabará del beneficiario certificado con el formato recogido en el Anexo II y se adjunta al expediente de financiación PRTR.

Concluida la actuación, se evaluará el impacto de las Ayudas desde el punto de vista de la normativa relativa a Ayudas de Estado

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN DE AYUDAS DE ESTADO

(A cumplimentar por la entidad decisora)

UNIDAD TRAMITADORA:

EXPEDIENTE:

CUESTIONARIO DE CONTROL	SI	NO	NO PROCEDE
<p>1. ¿Estamos ante una ayuda de Estado conforme al art. 107.1 TFUE(1)? (Para serlo deben concurrir todos los requisitos siguientes).</p> <p>a) Que la ayuda sea otorgada por el Estado o por fondos estatales, bajo cualquier forma. Se entienden incluidas todas las Administraciones Públicas.</p> <p>b) Que la ayuda falsee o amenace con falsear la competencia.</p> <p>c) Que la ayuda favorezca a determinadas empresas o producciones.</p>			



d) Que la ayuda afecte a los intercambios comerciales entre Estados miembro.			
Continúe únicamente en caso de haber marcado «SÍ».			
2. ¿Se aplica a la ayuda el régimen de mínimos (2)?			
En caso de haber marcado «SÍ» en la pregunta 2, continúe con la pregunta 6.			
3. ¿La ayuda de Estado es considerada compatible de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior (3), o por otras excepciones legalmente establecidas?			
En caso de haber marcado «SÍ» en la pregunta 3, continúe con las preguntas 5 y 6.			
4. ¿La ayuda de Estado ha sido notificada a la Comisión Europea, con carácter previo a su ejecución, conforme al artículo 108.3 TFUE?			
En caso de haber marcado «NO» en las preguntas 2 y 3, debe contestar «SÍ» a la pregunta 4.			
5. ¿La ayuda de Estado exenta de notificación previa ha sido comunicada a posteriori a la Comisión Europea en el plazo reglamentario?			
En caso de haber marcado «SÍ» en la pregunta 3, debe contestar «SÍ» a la pregunta 5.			
6. ¿La ayuda de Estado se ha incluido en la Base de Datos Nacional de Subvenciones? En caso de haber marcado «SÍ» a cualquiera de las preguntas anteriores, debe contestar «SÍ» a la pregunta 6.			

(1) La Comisión aclara los elementos clave relativos al concepto de ayuda de Estado en la Comunicación 2016/C 262/01 de la Comisión relativa al concepto de ayuda estatal conforme a lo dispuesto en el artículo 107, apartado 1, del TFUE.

(2) Reglamento (UE) 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del TFUE a las ayudas de mínimos; Reglamento (UE) 1408/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del TFUE a las ayudas de mínimos en el sector agrícola; Reglamento (UE) 717/2014 de la Comisión, de 27 de junio de 2014 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de mínimos en el sector de la pesca y de la acuicultura; Reglamento (UE) 360/2012 de la Comisión, de 25 de abril de 2012 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del TFUE a las ayudas de mínimos concedidas a empresas que prestan servicios de interés económico general. En este caso deben cumplirse con todas las obligaciones establecidos en los Reglamentos, prestando especial atención a que no se rebasen los umbrales establecidos para ser consideradas ayudas de mínimos.

(3) También la ayuda de Estado puede ser considerada compatible de conformidad con el Reglamento (UE) 702/2014 de la Comisión, de 25 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda en los sectores agrícola y forestal y en zonas rurales compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del TFUE o con el Reglamento (UE) n °1388/2014 de la Comisión, de 16 de diciembre de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas a empresas dedicadas a la producción, transformación y comercialización de productos de la pesca y de la acuicultura compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del TFUE. Si en un régimen de ayudas que se considere compatible, existiera alguna ayuda individual que deba ser notificada por sobrepasar los límites establecidos, deberán cumplirse en relación con la misma, con las obligaciones de notificación.

Fdo. Electrónicamente



ANEXO XI CERTIFICADO DE AUSENCIA DE AYUDAS DE ESTADO

(A cumplimentar por la entidad ejecutora)

UNIDAD TRAMITADORA

EXPEDIENTE:

Cuando proceda la Unidad Tramitadora recaba del beneficiario/s certificado con la siguiente formulación:

Don/Doña, con DNI,
 como titular del órgano/ Consejero Delegado/Gerente/ de la entidad
, con NIF
, y domicilio fiscal en

.....en la condición de órgano responsable/ órgano gestor/
 beneficiaria de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR/ que participa como
 contratista/ente destinatario del encargo/ subcontratista, en el desarrollo de actuaciones
 necesarias para la consecución de los objetivos definidos en el Componente XX
 «.....», manifiesta que la operación “**Nombre y Código de la Operación**”,
 financiada en la cantidad de “.....” euros con el Plan de Recuperación,
 Transformación y Resiliencia, no constituye Ayudas de Estado conforme a la normativa de
 aplicación.

Y para que así conste, expido el presente certificado en (**Lugar de firma**) en el día de la fecha.

Fecha y firma electrónica